

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.// PROCESO RAD 19001-33-33-009-2021-00145-00// DTE JHON FERNANDO APONZA ARARAT Y OTROS// DDOS MUNICIPIO DE POPAYÁN Y OTROS// REPARACIÓN DIRECTA

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Mar 22/08/2023 4:29 PM

Para:admin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co <admin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Juzgado 09 Administrativo - Cauca - Popayan <jadmin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC;joseluisibarrap@gmail.com <joseluisibarrap@gmail.com>;joseluisibarrap@gmail.com <joseluisibarrap@gmail.com>;Leidy Viviana Chilito Mamian <notificacionesjudiciales@cric-colombia.org>;DAMARIS ORDOÑEZ MARTINEZ

<notificacionesjudiciales@popayan.gov.co>;ieipoblazon@gmail.com <ieipoblazon@gmail.com>;karenerazo2093@hotmail.com <karenerazo2093@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (2 MB)

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C..pdf;

Señores

JUZGADO NOVENO (9º) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE POPAYÁN

jadmin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co

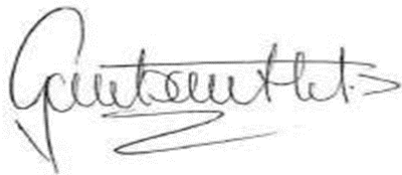
ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: JHON FERNANDO APONZA ARARAT Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE POPAYÁN Y OTROS
LL. EN GARANTÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA – LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
RADICACIÓN: 19001-33-33-009-2021-00145-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116. del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en calidad de apoderado especial de la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, conforme al poder que se allega junto con esta contestación, encontrándome dentro del término legal, comedidamente procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** propuesta por el señor **JHON FERNANDO APONZA ARARAT Y OTROS** en contra del **MUNICIPIO DE POPAYÁN Y OTROS**. Así mismo, **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por el **MUNICIPIO DE POPAYÁN** a mi representada.

Se le copia a todos los intervinientes del proceso.

Agradezco enviar acuse de recibo.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S.J.

ADPM

Señores

JUZGADO NOVENO (9º) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE POPAYÁN

jadmin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JHON FERNANDO APONZA ARARAT Y OTROS

DEMANDADO: MUNICIPIO DE POPAYÁN Y OTROS

LL. EN GARANTÍA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA – LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

RADICACIÓN: 19001-33-33-009-2021-00145-00

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116. del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en calidad de apoderado especial de la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.**, conforme al poder que se allega junto con esta contestación, encontrándome dentro del término legal, comedidamente procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA** propuesta por el señor **JHON FERNANDO APONZA ARARAT Y OTROS** en contra del **MUNICIPIO DE POPAYÁN Y OTROS**. Así mismo, **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por el **MUNICIPIO DE POPAYÁN** a mi representada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, así como las que contiene el llamamiento en garantía que nos ocupa, en los siguientes términos:

I. CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD

El auto del 21 de julio de 2023 por medio del cual se admitió el llamamiento en garantía realizado por el Municipio de Popayán a la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa dentro del proceso de la referencia fue notificado mediante correo electrónico el día 26 de julio de 2023.

De conformidad con el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo¹, los quince (15) días de traslado del llamamiento en garantía

¹ “Artículo 225. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado. (...)” (énfasis añadido).

corren de la siguiente forma: **27**, **28²** y 31 de julio y 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 22 de agosto de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente contestación de la demanda y del llamamiento en garantía realizada por la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa se radica en tiempo y de manera oportuna dentro del término legalmente conferido.

II. CAPÍTULO II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

2.1.1. FRENTE AL HECHO “2.1.1.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante, lo anterior, revisada la documental que obra dentro del expediente, se observan los registros civiles de nacimiento de los actores donde figura la señora Dominga Ofelia Landa como su progenitora.

2.1.2. FRENTE AL HECHO “2.1.2.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante, lo anterior, revisada la documental que obra dentro del expediente, se observa el registro civil de nacimiento de John Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) dónde figuran los señores Fanny Fabiola Ramírez Landa y Jhon Fernando Aponza Ararat.

2.1.3. FRENTE AL HECHO “2.1.3.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código

² “Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.

2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
(...)” (énfasis añadido).

General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante lo anterior, revisada la documental que obra dentro del expediente, se observa el registro civil de Miller Camilo Nazarit Ramírez donde figuran los señores Fanny Fabiola Ramírez Landa y Elkin Darío Nazarit Carabali.

Frente a la afirmación que se realiza en los hechos de que *“El señor ELKIN DARIO NAZARIT CARABALI desde el mismo instante en que inició relaciones maritales con la señora FANNY FABIOLA RAMIREZ LANDA acogió como hijo suyo al hijo de ésta; conviviendo todos en forma pública, pacífica y permanente, levantándose bajo un mismo techo, compartiendo alimento, alojamiento, ayudándose mutuamente y existiendo entre todos una relación propia de padres e hijos llena de amor, fraternidad, tutela, consejo y protección.”* Es necesario que los demandantes acrediten dicha situación, pues, frente a tales hechos no obra prueba alguna dentro del expediente y, mucho menos, dichos hechos gozan de presunción alguna.

2.1.4. FRENTE AL HECHO “2.1.4.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

2.1.5. FRENTE AL HECHO “2.1.5.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

2.1.6. FRENTE AL HECHO “2.1.6.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

2.1.7. FRENTE AL HECHO “2.2.1.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante lo anterior, revisada la documental que obra dentro del expediente, se observa el Decreto No. 000114 del 25 de marzo de 2009 *“Por la cual se reconoce oficialmente la sede WAWA K’ HARI PACHA MAMA “Hijos de la Madre Tierra” que se fusiona a la Institución Educativa Poblazón.”*

2.1.8. FRENTE AL HECHO “2.2.2.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante lo anterior, revisada la documental que obra dentro del expediente, se observa el Contrato No. 2020-180-000073-7 celebrado entre el Municipio de Popayán y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que tuvo por objeto *“GARANTIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO PARA ATENDER 509 CUPOS DISTRIBUIDOS EN LOS RESGUARDOS DE PLAZON Y QUINTANA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2500 DE 2010.”*

2.1.9. FRENTE AL HECHO “2.2.3.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante lo anterior, revisada la documental que obra dentro del expediente, se observa la certificación del 2 de febrero de 2021 suscrita por el señor Alveiro Maca Elago, rector de la Institución Educativa Indígena de Poblazon.

2.1.10. FRENTE AL HECHO “2.2.4.”: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante lo anterior, además de que lo relatado en el presente hecho se trata de una afirmación subjetiva del demandante, se tiene que la sola guarda de los menores, no implica, *per se*, el hecho de que las instituciones educativas sean responsables de manera absoluto por todo lo que ocurra con los infantes, pues, es menester recordar, ante lo dicho por los demandantes, que el Estado no es responsable por los hechos que sean ajenos a su actuar y además revistan las características de la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

2.1.11. **FRENTE AL HECHO “2.2.5.”** : No es un hecho, es una afirmación subjetiva del demandante.

2.1.12. **FRENTE AL HECHO “2.2.6.”**: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

No obstante lo anterior, revisada la documental que obra dentro del expediente, se observa en la historia clínica aportada por el demandante, que la fecha de ingreso del menor Jhon Devi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) fue el 12/03/2020 bajo la siguiente anotación:

Motivo Consulta:	Motivo de Consulta
Enfermedad Actual:	Enfermedad Actual

"HERIDO POR EXPLOSION" NOTA RETROPECTIVA HORA +12+03 POR CONGESTION DE SERVICIO

PACIENTE DE 14 AÑOS TRAIDO POR BOMBEROS Y PROFESORA, REIEREN QUE SUFRE HERIDAS POR EXPLOSION NO REFIEREN BIEN DATOS DEL EVENTO, REFIERE LA PROFESORA QUE EL MENOR SE SALE DE CLASE Y POSTERIORMENTE ESCUCHAN UNA EXPLOSION, LUEGO ENCUENTRAN AL MENOR CON HERIDA EN MANO DERECHA CON SANGRADO MODERADO CON PERDIGONES EN ABDOMEN Y LO TRAEN LOS BOMBEROS, INGRESA ALERTA A NIVEL HEMODINAMICO TAQUICARDICO, HIPOTENSO, SATURANDO ADECUADAMENTE CON LESIONES EN CARA ANTERIOR DE ANTEBRAZO DERECHO Y EN ABDOMEN, SE DECIDE TRASLADO A EMERGENCIA, SE INICIA MANEJO CON LIQUIDOS ENDOVENOSOS BOLO CON HARTMAN 1000 CC CON MEJORIA DE PRESION ARTERIAL 98/58, SE TOMA PARACLINICOS, VALORACION POR PEDIATRIA, ORTOPEdia, CIRUGIA PEDIATRICA, PEDIATRIA INDICA LIQUIDOS ENDOVENOSOS ALTOS, CUBIRIMENOT ANTIBIOTICO, PACIENTE ESTABLE SE IMAGENES PARA TOMA DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL ENCONTRANDO ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL: El hígado es homogéneo de forma y tamaño normal sin lesiones focales. No hay masas, quistes ni colecciones. Existe poca diferenciación del contorno hepático inferior, el cual está ocupado por el omento que no permite evaluar el parénquima. Vesícula biliar de forma y tamaño normales, de pared delgada de 2.4mm de espesor, sin líquido perivesicular, sin cálculos. Vía biliar intra y extrahepática no dilatada, colédoco de 3.2mm. Páncreas y retroperitoneo no visualizado por interposición de gas. Bazo y riñones presentan forma, tamaño, contorno y ecogenidad normal, sin lesiones focales. No hay hidronefrosis ni cálculos renales visibles por esta método. Aorta abdominal de calibre normal, mide: 11mm, no hay aneurismas ni adenopatías a su alrededor. Vejiga urinaria distendida, de pared delgada de 3mm de espesor, sin cálculos ni detritus. Próstata normal. Abundante líquido libre en cavidad peritoneal con detritus, visible en cuatro cuadrantes, volumen aproximado de 700cc. Leve distensión de asas delgadas y peristaltismo ausente. No se observa colección intra-abdominal. Sobre la pared abdominal anterior se observan dos pequeños perdigones y los otros orificios demuestran laceración con perforación del plano muscular que compromete el recto abdominal y los oblicuos. Imagen refringente en epigastrio sospechoso de neumoperitoneo. CONCLUSION: Estudio positivo para líquido libre en cavidad peritoneal, volumen aprox: 700cc.- Imagen sospechosa de neumoperitoneo.- lleo reflejo. HEMOGRAMA NORMAL, GASES VENOSOS CON ACIDOSIS METABOLICA, ELECTROLITOS NORMALES SODIO 141 POTASIO 3.7 CLORO 107 CALCIO 8.7 MAGNESIO 2.3 FOSFORO 9.4, FUNCION RENAL CREATININA 1.1 BUN 15, HEPATICA CONSERVADAS TGO 32 TGP 17 FOSFATASA ALCALINA 227 LDH 220 BILIRRUBINIA TOTAL 1.4 DIRECTA 0.1 AMILASAS 126 TP 14/11 TTP 28000, RX DE TORAX NORMAL, SE TRASLADA A EMERGENCIA ESTABLE POSTERIORMENTE, DONDE PERSONAL DE ENFERMERIA INFORMA DETERIOR DE EL ESTADO CLINICO DEL MENOR, A LAS 14+00 SE INICIAN MANIOBRAS DE REANIMACION CRADIOPULMAR CON IOT, DOSIS DE ADRENALINA # 5, DOSIS, SE REANIMA DURANTE 25 MINUTOS SIN OBTENER RESPUESTA A LAS 14+25 SE DECLARA FALLECIDO, SE INFORMA A POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA LEVANTAMIENT

2.1.13. **FRENTE AL HECHO “2.2.7.”**: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

2.1.14. **FRENTE AL HECHO “2.2.8.”**: No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

- 2.1.15. FRENTE AL HECHO “2.2.9.”:** No le consta a mi procurada por ser un hecho ajeno al giro ordinario de sus negocios. De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso y el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le incumbe a la parte actora probar el supuesto de hecho que alega.

2.2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL ACÁPITE DE PRETENSIONES

- 2.2.1. A LA PRETENSIÓN PRIMERA (DECLARATIVA):** Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** a la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial pretendida por los actores, porque tal y como se ahondará en el acápite de excepciones, no se encuentran probados todos y cada uno de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que, contrario a lo afirmado en la demanda, el daño sufrido tiene como causa el hecho de un tercero.

- 2.2.2. A LA PRETENSIÓN SEGUNDA (DAÑO EMERGENTE):** Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** al reconocimiento y pago de diez millones (\$10.000.000) de pesos M/Cte. a favor de los señores Fanny Fabiola Ramírez Landa y Jhon Fernando Aponza Ararat, en la medida en que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha expresado la necesidad de probar las supuestas erogaciones patrimoniales sufridas por las víctimas a través de facturas de venta u otros documentos similares.

Como se explicará más adelante en el acápite de excepciones a la demanda, en el caso en concreto, los actores no allegan facturas que reúnan los elementos consagrados en el Estatuto Tributario, por lo que es factible concluir que el daño material reclamado no reúne las características de todo daño como lo es la certidumbre sobre su existencia y causación.

- 2.2.3. A LA PRETENSIÓN TERCERA (PERJUICIOS MORALES):** Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** al reconocimiento y pago por concepto de perjuicios morales a las personas que integran el extremo activo de la presente litis (Dominga Ofelia Landa, Elkin Darío Nazarit Carabali, Fanny Fabiola Ramírez Landa, Miller Camilo Nazarit Ramírez, Jhon Fernando Aponza Ararat, Yeferson Carabali Ararat, Yeison Carabali Ararat, Mauricio Aponza Ararat, Nora Isabel Aponza Choco, Salome Aponza Choco, Dooglas Graciano Barreiro Landa, Dilan Alejandro Barreiro Ararat, Marcia Milagro Valencia Landa, Yanpol Marroquín Valencia, Cristina Liseth Marroquín Valencia, William Landa y Silvio Alexander Ortiz Landa). **ELLO EN LA MEDIDA EN QUE, PRIMERO, NO ESTÁ ACREDITADA LA SUPUESTA FALLA DEL SERVICIO QUE SE LE PRETENDE ENDILGAR A LAS DEMANDADAS; SEGUNDO, EN TODO CASO, LOS PERJUICIOS MORALES NO SON**

IMPUTABLES A LAS DEMANDADAS EN CUANTO QUE EL DAÑO PROVIENE DEL ACTUAR DE UN TERCERO; y, tercero, en que los demandantes realizan una excesiva tasación de los perjuicios morales solicitados en claro desmedro y contradicción con la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado desde el 28 de agosto de 2014.

2.2.4. A LA PRETENSIÓN CUARTA (DAÑO A LA SALUD): Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** rotundamente al reconocimiento de este perjuicio inmaterial, por las siguientes razones que se pasan a enunciar: en primer lugar, porque no se encuentra acreditada la responsabilidad de las entidades demandadas; y, en segundo lugar, porque, además de que no está probado la existencia e imputabilidad del perjuicio en cuestión, se tiene que su tasación resulta excesiva en claro desmedro y contradicción con la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado desde el 28 de agosto de 2014.

2.2.5. A LA PRETENSIÓN QUINTA (PERDIDA DE OPORTUNIDAD): Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** rotundamente al reconocimiento y pago de la pérdida de chance u oportunidad como daño autónomo, por las razones que se pasan a exponer: primero, porque la atención médica del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) no se encontraba a cargo del Municipio de Popayán, entidad asegurada de la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa; y, segundo, no se ha demostrado la negligencia médica del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

2.2.6. A LA PRETENSIÓN SEXTA (INTERESES): Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** rotundamente a que se conmine a cualquier actualización por concepto de sumas de dinero, toda vez que, al no existir fundamentos fácticos ni jurídicos que permitan endilgar el deber de indemnizar, de ninguna manera puede pretenderse con éxito que prospere el reconocimiento de este pedimento, bajo el entendido que sin sentencia favorable a los intereses de los demandantes, no habrá obligación que cumplir, y mucho menos actualización de sumas que reconocer.

Ahora bien, frente a la pretensión de intereses, la misma no es directamente una pretensión. Se trata de una sanción establecida por el legislador en el evento de que se produzca una sentencia condenatoria que reconozca una suma líquida de dinero y la misma no sea cancelada dentro del término previsto para el efecto.

2.2.7. A LA PRETENSIÓN SÉPTIMA (COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO): Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** a la solicitud de condena en costas y agencias en derecho, en la medida en que una remota e hipotética decisión

desfavorable no implica una condena automática, ello debido a que las costas solo pueden decretarse cuando existen pruebas dentro del expediente de su causación.

Al respecto, se debe tener en cuenta que, la Sala Plena del Consejo de Estado con ponencia de la Consejera Rocío Araújo Oñate ha dicho que: “...*la condena en costas, opera de manera objetiva contra la parte vencida en juicio, **pero no en forma automática**, en tanto el juzgador debe valorar que esté configurada cualquiera de las hipótesis previstas por el legislador.*”³(énfasis añadido).

2.2.8. A LA PRETENSIÓN OCTAVA: Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** a la pretensión de cumplimiento de la condena, toda vez que el Municipio de Popayán, la entidad territorial asegurada por la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, no es responsable por los lamentables hechos en los que falleció el menor Jhon Devi Aponza Ramírez (q.e.p.d.), sino que los fatídicos hechos son atribuibles al actuar de un tercero completamente ajeno a la entidad asegurada.

En general, **ME OPONGO** a todas y cada una de las pretensiones formuladas por los demandantes a través del medio de control de reparación directa como consecuencia de la inexistencia de los elementos y presupuestos necesarios para el surgimiento del débito indemnizatorio a cargo del Estado, el desconocimiento de la carga de la prueba de los actores y la falta de presupuestos para que se configure el título de imputación subjetivo denominado falla del servicio o cualquier otro título de imputación.

2.3. EXCEPCIONES FRENTE A LA DEMANDA

En el presente acápite se presentarán los fundamentos de hecho y de derecho que en general, sustentan la oposición a las pretensiones de la demanda y que en particular dan cuenta de que la parte demandante no ha probado, como es su deber, la existencia de todos los supuestos normativos de la presunta responsabilidad patrimonial que pretende endilgarse en contra de las demandadas en este litigio. Se sustenta la oposición a las pretensiones invocadas por el extremo activo de este litigio, de conformidad con las siguientes excepciones:

2.3.1. DE FONDO O MÉRITO

2.3.1.1. EXCEPCIONES PLANTEADAS POR QUIEN EFECTUÓ EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A MI REPRESENTADA

Solicito al juzgador de instancia, tener como excepciones contra la demanda las planteadas por el Municipio de Popayán, las cuales coadyuvo expresamente sólo en cuanto no perjudiquen los intereses de mi prohijada la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, ni comprometan su responsabilidad.

³ C.E. Sala Plena. Ex. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU, agosto 6/2019. C.P. Rocío Araújo Oñate

2.3.1.2. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA RESPECTO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EL ASEGURADO

Se plantea la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Municipio de Popayán ya que, si bien este ente territorial celebró un contrato con la respectiva comunidad indígena para el establecimiento de la Institución Educativa Poblazón, la responsabilidad que se predica de las escuelas frente a sus alumnos, es imputable únicamente a quién figura como garante de dichos educandos.

Para la prosperidad de la excepción que se plantea, resulta imprescindible recordar quién es el garante en este prototípico caso de responsabilidad extracontractual. Sobre el particular, el H. Consejo de Estado ha dicho lo siguiente:

“Frente a los alcances del deber objetivo de cuidado a cargo de los establecimientos educativos oficiales, esta Corporación ha considerado⁴:

Este ejercicio tiene como presupuesto al reconocimiento de una posición de garante de las instituciones de educación en función de la seguridad de quienes han confiado en su capacidad autonómica de organización. Es por esto que en anteriores oportunidades esta Corporación ha reconocido la existencia de una obligación o deber de cuidado de los establecimientos educativos respecto de los estudiantes, teniendo en cuenta que quienes ingresan a las instalaciones educativas se someten a las reglas impuestas por éstas, y como contraprestación, surge para ellas un deber correlativo de garantizarle a dichas personas la seguridad necesaria para que puedan obtener el cumplimiento de los logros educativos que se proponen⁵, obligación que se traduce en un haz de prestaciones que decrece proporcionalmente en consideración al incremento de la edad de las personas que les son confiadas o que voluntariamente se someten a su disciplina, sin que ello signifique que cesen las obligaciones que dimanen de su posición.”⁶ (énfasis añadido).

De igual forma, resulta conveniente traer a colación una definición jurisprudencial del concepto de “*posición de garante*” tan utilizada y a la cual recurre frecuentemente el H. Consejo de Estado en caso de lesiones de estudiantes dentro de centros educativos. Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencia C-1184 de 2008 dijo lo siguiente:

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 36960, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

⁵ Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 23 de 2010, rad 18468, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Consejera Ponente: María Adriana Marín. Sentencia del 6 de noviembre de 2020. Radicado No. 66001-23-31-000-2011-00334-01 (52561)

“Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Se aparta de la misma quien estando obligado incumple ese deber, haciendo surgir un evento lesivo que podía haber impedido. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. En sentido amplio, es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas.”

Revisada la definición de garante, resulta claro que, para el caso en concreto, quien fungía en tal posición era el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y/o quien haga sus veces como propietario de la Institución Educativa Poblazón donde estudiaba el menor fallecido Jhon Deivi Aponza Ramírez, pues era dicho ente quién tenía la posición de garante tanto jurídica como material, siendo el único que podía, en el caso en concreto, impedir cualquier evento lesivo que acaeciera sobre el menor en cuestión.

Por todo lo anterior, se le solicita al despacho declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Municipio de Popayán en tanto dicho ente territorial no tenía la posición de garante, en el caso en concreto, frente al menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.).

2.3.1.3. EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, LA ASEGURADA, NO ERA RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN MÉDICA PRESTADA

Se plantea la siguiente excepción toda vez que la solicitud de una condena solidaria pretendida por los actores resulta imposible a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, ello por la simple razón de que el Hospital Universitario San José E.S.E. es una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y organizacional.

Por todo lo anterior, dado que la atención médica prestada al menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) fue prestada por una entidad pública diferente al Municipio de Popayán que, además consta de personería jurídica propia, patrimonio propio y autonomía administrativa, las eventuales deficiencias que se puedan encontrar en el servicio médico prestado son difícilmente imputables a la entidad territorial asegurada, haciendo, por contera, imposible una condena solidaria.

2.3.1.4. HECHO DE UN TERCERO QUE DERRUYE CUALQUIER RELACIÓN DE CAUSALIDAD: INEXISTENCIA DE UNA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA A CARGO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Se plantea la siguiente excepción, en la medida en que la muerte del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) tiene como causa exclusiva y adecuada el actuar de un tercero ajeno a la Institución Educativa Poblazón y al Municipio de Popayán, por lo que no existe una relación causal entre el fatídico hecho y la actividad desplegada por las demandadas.

Para sustentar la anterior tesis debe tenerse en cuenta que el artículo 90 constitucional, denominada por algunos como la cláusula de la responsabilidad del Estado colombiano, exige que los daños antijurídicos que sufren los coadministrados sean imputables a la acción u omisión de las autoridades públicas para que pueda nacer el débito indemnizatorio a cargo de la Administración Pública. El artículo en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.” (énfasis añadido).

Lo anterior quiere decir, que la Administración Pública no es *per se* responsable por los daños que cometan terceros ajenos al servicio público, sino que, es necesario, que los demandantes demuestren, de alguna manera, que el daño irrogado a ellos tiene como causa, además del hecho del tercero, una acción u omisión de las autoridades públicas.

En virtud de lo anterior, tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional han desarrollado, dentro de las múltiples causales de exoneración de la responsabilidad extracontractual del Estado, el hecho de un tercero, como una causal que impide endilgar responsabilidad a la Administración Pública cuando ha quedado suficientemente acreditado que el daño no tiene su origen en el servicio público. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

“De acuerdo con nuestro Consejo de Estado, el hecho de un tercero exonera de responsabilidad a la Administración en el derecho Administrativo colombiano, siempre y cuando se demuestre que dicho tercero es completamente ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la ruptura del nexo causal. Además, es indispensable que pueda tenerse como causa exclusiva del daño, producida en la circunstancia que sea imprevisible e irresistible para que reúna las características de una causa extraña, ajena a la conducta de quien produjo el daño.”⁷

⁷ Saavedra Becerra, R. (2018). *De la responsabilidad patrimonial del Estado*. Tomo II. Grupo Editorial Ibañez. Pág. 1288.

De igual forma, el H. Consejo de Estado en providencia recientes ha recordado el concepto y alcance de la figura del hecho de un tercero para exonerar a la Administración Pública de responsabilidad extracontractual. Así, por ejemplo, en sentencia del 22 de octubre de 2021⁸, haciendo una reiteración de lo dicho por el alto tribunal de lo contencioso administrativo, se dijo lo siguiente:

“Esta Corporación, respecto de los requisitos para considerar que el hecho de un tercero concurre en un supuesto específico como eximente de responsabilidad administrativa, ha expresado⁹:

(i) Que sea la causa exclusiva del daño (...).

(ii) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado¹⁰.

(iii) Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a ésta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso (...)¹¹.

En relación con la imprevisibilidad, se señala que este elemento no se excluye la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera ser previsto. Y en relación con la irresistibilidad, cabe señalar que ésta se vincula con juicios de carácter técnico y económico, es decir, que la valoración sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoración de los avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para conjurar los del daño.

Para que el hecho del tercero constituya causa extraña y excluya la

⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021. Consejera Ponente: María Adriana Marín, Radicado No. 19001-23-31-000-2011-10050-01(53651). Actor: ELIZABETH PACHECO GIRÓN Y OTROS. Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL. Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de enero de 2015, expediente 32.912, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

¹⁰ Cita del texto original: “Sobre ese aspecto puede verse MAZEAUD Y TUNC. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y cuasidelictual. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962. Tomo II Volumen II, pág. 237”.

¹¹ Luis Josseland, *Derecho Civil*, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341.

responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Lo determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuación no tuvo ningún vínculo con el servicio, amén de haber constituido la causa exclusiva del daño¹².
(énfasis añadido).

Como se observa, además de los elementos clásicos de toda causa extraña como lo son la imprevisibilidad y la irresistibilidad, se tiene que el H. Consejo de Estado no exige que el tercero este plenamente identificado, pues, sólo se requiere que este sea completamente ajeno al servicio público.

Ahora bien, para el caso en concreto, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha tenido la oportunidad de referirse en varias ocasiones a los daños que sufren los estudiantes dentro de las instituciones educativas, aclarando que la responsabilidad de dichas instituciones no es absoluta, veamos.

En un caso de similares connotaciones fácticas y jurídicas, por no decir idéntico al caso de marras, donde fue asesinado un estudiante dentro de las instalaciones de la Universidad de Antioquia, el H. Consejo de Estado, aplicando la causal de exoneración denominada hecho de un tercero, dijo lo siguiente:

“... el daño consiste en la muerte del joven David Santiago Jaramillo Urrego, ocurrida en las instalaciones la Universidad de Antioquia, una entidad de estudios superiores, autónoma con régimen especial creado por Ley 71 de 1878, de naturaleza pública., cuando se encontraba en uno de los pasillos de su facultad con otros compañeros, espacio al cual ingresaron personas armadas que dispararon repetidamente contra él.

(...)

... la Sala podrá verificar, si en tales condiciones, omitió la Universidad de Antioquia el cumplimiento de la obligación de adoptar medidas razonables para prevenir la muerte violenta que sufrió David Santiago Jaramillo Urrego a manos de terceras personas, dentro de sus instalaciones, para lo cual, deberá establecer si las medidas que adoptó fueron idóneas para garantía de esa seguridad, si fueron las necesarias para cumplimiento del cometido que se proponían, y si hubo en ellas proporcionalidad, en sentido estricto, en orden a determinar, si las limitaciones que tuvieron las medidas de seguridad en el caso concreto, resultaban proporcionales al

¹² Cita del texto original: “Sección Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2013, expediente 18148”.

deber de satisfacción que demandaba el respeto por la intimidad e individualidad de las personas. Veamos:

*¿Eran idóneas las medidas adoptadas por la Universidad para garantizar la seguridad de las personas dentro de sus instalaciones? Las medidas adoptadas consistieron, básicamente, en la carnetización de los miembros de esa comunidad, en la disposición de unos servidores suyos, de planta, para servicio de vigilancia, y en la celebración de un contrato de prestación de servicios de seguridad privada para complemento de la vigilancia que realizaba con empleo de su propio recurso humano, servicios que comprendían el control del ingreso de personas a las instalaciones de la universidad. A la luz de este contrato, la compañía de vigilancia privada se obligaba a proporcionar 19.34 vigilantes para el servicio durante las 24 horas del día, prestado en los turnos que la Universidad requiriera, es decir que la entidad podía solicitar y obtener un mayor número de vigilantes en épocas de crisis o cuando determinara que eran insuficientes para ejercer el control debido. A juicio de la Sala, **ninguna duda queda sobre la relación existente entre estas medidas y los fines que pretendían servir, de protección de la seguridad, como bien jurídico relevante, aunque no fuera el principal bien que concernía proporcional a la institución, pues su objetivo misional lo constituye el servicio de educación, y mal puede exigirse de ella que sustituyera, con todas sus implicaciones y alcances, a las fuerzas institucionales del orden en el área destinada al funcionamiento de su sede**, como tampoco podía exigírsele, lo que no se puede demandar de estas fuerzas, que extremara las medidas al punto de garantizar la custodia de todos y cada uno de sus edificaciones, y de todas y cada una de las personas que conformaban la comunidad universitaria. **Se trataba, en consecuencia, de una obligación de medio, no de resultado.***

*Sobre el particular, forzoso es reseñar que **el medio universitario gozaba de una relativa tranquilidad, que no había disturbios o condiciones que hicieran recomendable la medida extrema de reclamar la presencia de la fuerza pública para redoblar esfuerzos en procura de seguridad, y que tampoco hay prueba en el expediente del padecimiento de amenazas por parte del estudiante que fue exterminado**, amenazas que de haber sido conocidas por la institución universitaria, demandarían la anticipación de medidas más rigurosas, aún a costa de la restricción de las libertades.*

Como un segundo paso en el test propuesto, se debe averiguar si eran necesarias las medidas adoptadas. Esto significa, verificar si, en lo que corresponde al caso, tenía la Universidad a su alcance, otras posibles medidas, menos lesivas de la libertad del estudiantado, que condujeran a la procurada seguridad. Como ha quedado previsto, esta cuestión debe resolverse a partir del ambiente que demanda una comunidad universitaria, pues otras serías las exigencias que se le podrían

hacer a una escuela primaria, y otras muy diferentes las que podrían demandarse de una institución carcelaria. Para la Sala, las medidas eran las estrictamente necesarias y posibles. **Otras medidas que echan de menos los testigos y los recurrentes, como el “cacheo” o la “requisa” sobre los vehículos y sobre las personas que ingresaban a la universidad, para verificar que no lo hicieran armados, no sólo no estaba dentro del ámbito funcional de aquellos, sino que les está expresamente prohibida, comoquiera que están reservados a la fuerza pública.** Y otras, como el empleo de perros de seguridad, aptas aunque incómodas en otros medios, como por ejemplo, en la banca, resultarían intolerables en el medio universitario. Por tanto, no puede ser de recibo el reproche que se ha hecho a las medidas de seguridad de la universidad bajo la indicación de su limitación a la exigencia de la exhibición del carnet al momento de ingreso y de revisión de los elementos que portara la persona, “sin hacer requisa física”.

Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto se cumplió, porque las ventajas que se podían obtener en materia de seguridad mediante la aplicación de medidas legales, tales como el control de ingreso de personas carnetizadas, y la presencia disuasiva de personal de vigilancia por diversas áreas dentro del terreno en el que se asentaba la universidad, compensaban los sacrificios que estas medidas imponían a los visitantes y miembros de esa comunidad y que los mismos estaban obligados a soportar. Otro tipo de hipotéticas medidas, como las atrás descartadas, quebrarían la ecuación necesaria entre seguridad y otros derechos de los miembros de la comunidad universitaria.

(...)

Así las cosas, la Sala no encuentra en el presente caso, que el elemento fáctico que aparece acreditado en el proceso constituya una falla en el servicio. Concluye que el resultado dañino no fue causado por la vulneración de imperativos normativos que pesaran sobre la universidad, ni como abstenciones, no como prestaciones activas, idóneas, idóneas, necesarias y proporcionales frente a otros derechos de la comunidad académica.

Por tanto, superado el test realizado, el juicio de imputación se contrae nuevamente a los alcances de la causalidad material, para concluir que **en el presente caso obra prueba de la causal de exoneración denominada hecho de un tercero, como causa exclusiva y determinante en la producción del daño, y como corolario de ello se impone la absolución de responsabilidad a la entidad demandada, y consiguientemente, la confirmación de la sentencia recurrida.**¹³ (énfasis añadido).

¹³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 24 de abril de 2017. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Radicado No. 05001-23-31-000-2002-01182-01(36960). Actor: LUISA YANET URREGO DURANGO Y OTROS. Demandado: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Como se observa de la sentencia traída a colación, no es posible reprochar la conducta de una institución educativa, cuando la misma no conocía previamente del riesgo o peligro que corría uno de sus educandos, por lo que la máxima del derecho que predica que nadie está obligado a lo imposible aplica igualmente en casos como el que ahora ocupa la atención del despacho.

Así, la prueba de la imprevisibilidad e irresistibilidad de la agresión que terceros ejercieron sobre la humanidad del estudiante Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.), es, precisamente, que no obra dentro del expediente ninguna prueba que demuestre que la institución Educativa Poblazón y el Municipio de Popayán conocían previamente del riesgo que corría el estudiante en cuestión.

De igual forma, el mismo Consejo de Estado ha recordado, en sentencias como la del 31 de julio de 2014, que aún en los casos en que las instituciones educativas figuran como garantes de sus educandos, la sola existencia del daño no genera *per se* el nacimiento del débito indemnizatorio a cargo del Estado, pues, resulta válido, como ahora se hace, alegar causales de exoneración como lo es el hecho de un tercero:

*“...también ha establecido la Corporación, bajo la óptica del régimen por falla del servicio, que **esta responsabilidad no es absoluta, ya que las instituciones educativas pueden exonerarse por los daños sufridos por sus educandos si demuestran la diligencia en su actuación o una de las causales eximentes de responsabilidad**¹⁴.*

12. De igual forma, **bajo el régimen de la responsabilidad objetiva esta condición no genera per se la declaratoria de responsabilidad por las lesiones que sufran terceros puestos bajo su guarda**. Es necesario establecer que quien ostentaba ese rol inobservó las normas de cuidado que debió adoptar y como resultado expuso a un riesgo anormal a esas personas (...)”¹⁵ (énfasis añadido).

¹⁴ “Ahora bien, cuando los alumnos de un establecimiento educativo, en desarrollo de actividades propias de la escolaridad, padecen daño, cabría deducir la responsabilidad al ente educativo, siempre que se demuestre que falló en el cumplimiento del deber de vigilancia y cuidado del alumno. De esta manera se tiene que, si en el proceso se prueba que el establecimiento educativo obró con diligencia, pericia y eficiencia en el cuidado del alumno, no habrá lugar a declarar su responsabilidad por ausencia de imputación del daño”. En Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de julio de 2005, exp. 15462, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. “El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos puedan exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.” En Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17533, C.P. Mauricio Fajardo Gómez E. Ver también sentencias del 23 de agosto de 2010, exp. 18657, 24 de marzo de 2011, exp. 19032 y 11 de mayo de 2011, exp. 18279, exp. 18279, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

¹⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 31 de julio de 2014. Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth. Radicado No. 41001-23-31-000-1995-

Aplicando los criterios jurisprudenciales al caso en particular, se tiene que la Institución Educativa Poblazon y el Municipio de Popayán no tenían conocimiento previo de que el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) iba a sufrir un atentado contra su humanidad y, mucho menos, conocían que dicho suceso ocurriría dentro de las instalaciones del plantel educativo, por lo que el evento que ahora ocupa la atención era ciertamente imprevisible e irresistible para las entidades demandadas, imposibilitando una actuación diferente o acciones adicionales para preservar la seguridad del educando.

De igual forma, revisado el expediente, tampoco obra ninguna prueba que demuestre que la Institución Educativa Poblazon y el Municipio de Popayán actuaron al margen del servicio público de educación, pues, lo cierto es que no existe prueba alguna que demuestre que las demandadas incumplieron sus deberes como garantes del educando en cuestión.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente al despacho declarar probada la excepción del hecho de un tercero, en la medida en que la responsabilidad de las Instituciones Educativas frente a sus educandos no puede ser absoluta, pues, en casos como el que ahora ocupa la atención del despacho, donde, a pesar de la diligencia y cuidado del garante, ocurre el daño, no es posible atribuir tal responsabilidad a las demandadas, máxime cuando se tiene acreditado la existencia del hecho de un tercero.

2.3.1.5. CASO FORTUITO

En adición a lo anterior, se plantea la excepción de caso fortuito como causa extraña de exoneración de la responsabilidad extracontractual de las demandadas, en la medida en que los proyectiles que impactaron a Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) reúnen los elementos constitutivos de todo caso fortuito: la imprevisibilidad y la irresistibilidad.

Para sustentar la anterior excepción de fondo o mérito, debe tenerse en cuenta que el caso fortuito ha sido definido por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado como:

“(...) el caso fortuito es el acontecimiento que ocurre casualmente como suceso interno (se produce dentro del campo de la actividad del deudor o del agente que produce el daño), que es imprevisible (que la mente del humano no puede prever) y que genera dificultad para que el deudor cumpla la obligación a su cargo o para superar la situación extraordinaria (no imposibilita cumplir o superar la dificultad).”¹⁶

De igual forma, frente a los elementos que integran esta causa extraña, la imprevisibilidad

08078-01(30126). Actor: ELMER HERRERA Y OTROS. Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA - MUNICIPIO DE NEIVA

¹⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 8 de noviembre de 2016. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado No. 73001-23-31-000-2007-00709-02(39692)

y la irresistibilidad, la doctrina nacional encabezada por el profesor Javier Tamayo Jaramillo ha tenido a bien en definir dichos conceptos de la siguiente manera:

“... podemos entender que lo imprevisible es también aquello cuya ocurrencia, que pese a la diligencia y cuidado del agente, es inevitable. Y que prever no solo significa ver con anticipación, sino también tener la diligencia y cuidado necesarios para evitar los efectos de un fenómeno que posiblemente ocurrirá. (...) El hombre diligente y prudente previene todo lo necesario para un eventual fenómeno que ha de obstaculizarle el cumplimiento. Así las cosas, la causa extraña se torna irresistible porque no siendo imaginable con anticipación, el agente no pudo tomar las medidas para evitarla; o porque conociendo su eventual ocurrencia tomó las medidas necesarias para evitar sus efectos y pese a ello no pudo lograrlo. (...) Pero finalmente lo que libera al deudor, en una u otra situación, es el hecho de no haber podido resistir el obstáculo, pese a haber puesto diligencia y cuidado, o a no haber cometido culpa por no haber podido imaginar el hecho con anticipación.

Todo se reduce entonces a la posibilidad de identificar la imprevisibilidad como ausencia de culpa por parte del deudor. Así las cosas, cuando el hecho es irresistible y no ha mediado culpa del deudor, entonces estaremos frente a una causa extraña, ya que el agente, pese a su previsión o a la imposibilidad de prevenir, no pudo evitar el daño.”¹⁷

Vistas las definiciones jurisprudenciales y doctrinales traídas a colación, se tiene que el ataque que sufrió el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) reúne todos los elementos de un caso fortuito, pues, lo cierto es que el garante de su protección, la Institución Educativa Poblazón, no estaba advertida de ningún atentado contra la integridad del menor y era difícil, por no decir absolutamente imposible, resistir un ataque de semejante magnitud cuando, a pesar de ser diligentes con el cuidado del educando, no se sabía de dónde iba a provenir el ataque o cuándo iba a tener lugar el mismo.

Por todo lo anterior, se le solicita al despacho declarar probada la excepción de caso fortuito en la medida en que, si bien el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) fue lesionado dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Poblazón, también es cierto que dicho ataque era imprevisible e irresistible aún actuando de manera diligente y cuidadosa.

2.3.1.6. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE MARCIA MILAGRO VALENCIA LANDA.

Se plantea la falta de legitimación en la causa por activa respecto de la señora Marcia Milagro Valencia Landa en la medida en que no acreditó su parentesco frente a la víctima directa, el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.), pues ni siquiera obra el Registro

¹⁷ Tamayo Jaramillo, J. (2007). Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Legis S.A. Pág. 43 y 44.

Civil de Nacimiento de la demandante dentro del expediente.

Sobre la legitimación en la causa por activa, el H. Consejo de Estado en sentencia del 22 de noviembre de 2021¹⁸ dijo lo siguiente:

“La jurisprudencia ha definido que la legitimación en la causa: “(...) alude a la relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva”¹⁹. Así, se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa²⁰. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas²¹.

*Así pues, **un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido** o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores²².*” (énfasis añadido).

¹⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 22 de noviembre de 2021. Consejero Ponente: José Roberto SÁCHICA Méndez. Radicado No. 47001-23-31-000-2009-00022-01(52186)

¹⁹ Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de agosto de 2012. Rad. 73001-23-31-000-2010-00472-01(AP). C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

²⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias de 28 de abril de 2005 Exp. 14.178 y del 26 de noviembre de 2014 Exp. 31.747.

²¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007 Exp. 13.503.

²² La legitimación material en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. Así, desde la perspectiva pasiva, la legitimación en la causa supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de septiembre de 2012. Exp. 24677. C.P. Enrique Gil Botero.

Con base en la sentencia traída a colación y el concepto mismo de legitimación en la causa, se solicita negar las pretensiones frente a todos los demandantes y en especial, frente a la señora Marcia Milagro Valencia Landa, pues, ante la inexistencia de su Registro Civil de Nacimiento dentro del expediente no se sabe a ciencia cierta los puntos de conexión que tiene con el presente litigio.

2.3.1.7. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE ELKIN DARIO NAZARIT CARABALI

El señor Elkin Darío Nazarit Carabali carece de legitimación en la causa por activa desde su vertiente material, en la medida en que no se acredita el parentesco civil que haya podido tener con el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.), pues, en el expediente no reposa adopción legalmente tramitada o documento similar, que acredite que el actor se haya comportado como un “verdadero padre” frente al menor fallecido.

Para sustentar la excepción que se plantea, debe tenerse en cuenta que de antaño la jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha establecido la distinción de la legitimación en la causa, explicando que la vertiente material consiste en lo siguiente:

“(…) la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas²³.

Así pues, un sujeto puede estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores²⁴.” (énfasis añadido).

De igual forma, sobre casos como el que ahora ocupa la atención del despacho, el H. Consejo de Estado ha dicho lo siguiente frente a la legitimación en la causa por activa respecto de los padres de crianza:

“Tratándose de una relación de hecho, son las expresiones públicas y privadas que

²³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007 Exp. 13.503.

²⁴ La legitimación material en la causa por pasiva es entendida como la calidad que tiene una persona para contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación. Así, desde la perspectiva pasiva, la legitimación en la causa supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de septiembre de 2012. Exp. 24677. C.P. Enrique Gil Botero.

de esa relación se hagan, el elemento de convicción que ha de traerse al proceso para acreditar la aducida condición, sin que exista tarifa legal o solemnidad alguna que regule la materia. **Tal relación debe probarse mediante elementos indiciarios traídos por algún instrumento de memoria al proceso, de la vida cotidiana de los sujetos en relación, que den cuenta de una forma de trato entre sus extremos, de sus actuaciones públicas y privadas, asimilable a la que, conforme a la experiencia, se prodigan que actúan como en la generalidad lo hacen los padres con sus hijos biológicos y viceversa. Dicho trato debe trascender al universo social en el que se desenvuelve tal relación, de manera tal que se genere la convicción en ese medio, de la existencia de una comunidad de familia en la que, para el caso, James Alberto Ramírez, sea reputado como padre de Andrea Stephania Henao Quiñonez. Tales manifestaciones de afecto filial deben difundirse, no sólo en el ámbito social, sino en el tiempo.**

Sobre el particular **la jurisprudencia de la Subsección ha tomado como referente temporal de la duración que deben tener ese trato y esa reputación, para que constituya un indicio de la relación de crianza, el lapso de cinco (5) años que conforme al artículo 398 del código civil se exigen para la acreditación de la posesión notoria del estado civil de hijo.**

En caso similar se ha dicho sobre **la necesidad de probar que el padre “durante el término mínimo de 5 años, se haya comportado como tal, proveyendo para la subsistencia, educación, manutención o establecimiento del hijo (trato) presentándolo con este carácter ante la familia y la sociedad, que a su vez le reputará y reconocerá el carácter de hijo, y así el hijo le reconozca y se comporte frente al padre**²⁵.²⁶ (énfasis añadido).

Vistas las exigencias jurisprudenciales sobre la acreditación de la calidad del padre de crianza, se tiene que, además de su propio dicho, los demandantes no aportan siquiera una prueba sumaria sobre el trato duradero en el tiempo de Elkin Darío Nazarit Carabali frente al menor fallecido Jhon Deivi Aponza Ramírez.

Por todo lo anterior, se le solicita respetuosamente al despacho declarar probada la excepción propuesta, declarando la falta de legitimación en la causa por activa respecto de Elkin Darío Nazarit Carabali, por no haberse acreditado la condición de padre proveyendo para la subsistencia, educación, manutención o establecimiento del hijo, tal y como lo exigen la jurisprudencia del máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa.

²⁵ Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección C Sentencia de 12 de noviembre de 2014, Expediente 29.139.

²⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 8 de octubre de 2021. Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Radicado No. 76001-23-31-000-2008-01161-01(46924)

2.3.1.8. INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO – AUSENCIA DE ELEMENTOS PROBATORIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO

Se plantea la siguiente excepción, en la medida en que el presente caso debe resolverse bajo la cuerda del título de imputación subjetivo de la falla del servicio probada y que, de las pruebas obrantes dentro del expediente, no se deriva que la Institución Educativa Poblazon y el Municipio de Popayán hayan incumplido las obligaciones constitucionales y legales que se encontraban a su cargo.

Para sustentar la anterior excepción, el despacho debe tener en cuenta que, fuera de los regímenes objetivos de responsabilidad del Estado, la falla del servicio es el título de imputación por excelencia bajo el cual se juzga la conducta de la Administración Pública, *imputatio iuris* que requiere esencialmente su prueba y acreditación como la ha dicho el H. Consejo de Estado:

*“Es preciso recordar que, cuando se imputa un daño al Estado con fundamento en una omisión o inacción por su parte, el interesado se encuentra en el escenario de culpa probada y, en consecuencia, está llamado a aportar o, según el caso, solicitar el recaudo de los medios de convencimiento con los cuales se evidencie el supuesto de hecho que alega estructuró una falla en el servicio, **pues de otro modo, al juez no le resta otra posibilidad que negar las pretensiones por la insatisfacción del onus probandi que le asiste al interesado**, conforme con las previsiones del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil²⁷.”²⁸ (énfasis añadido).*

Sobre la carga probatoria de los demandantes cuando se trata de regímenes subjetivos como al falla del servicio, la doctrina nacional ha reiterado la anterior posición jurisprudencial:

*“...es claro que el hecho de que un daño le sea imputable a una persona pública no es suficiente normalmente para hacerla responsable: **es necesario que la víctima demuestre que en su origen se encuentra un mal funcionamiento administrativo**. Se trata de que el actor establezca sobre todo la realidad de los hechos, porque la calificación propiamente jurídica corresponde al juez. Naturalmente, un cúmulo probatorio deficiente pone en riesgo la prosperidad de las*

²⁷ “ARTÍCULO 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

²⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia de 22 de noviembre de 2021. Consejero Ponente: José Roberto SÁCHICA MÉNDEZ. Radicado No. 19001-23-31-000-2011-00434-01(53977).

pretensiones. Se trata entonces de que, normalmente, **la responsabilidad por falta es una responsabilidad por falta probada**. Según Llorens-Fraysse, “hay responsabilidad por falta probada cuando el juez exige que la falta sea establecida con certeza (habitualmente) el juez no se contenta con indicios”.

En consecuencia, **si el demandante no prueba la falla y en el caso concreto ésta no se presume, aún cuando la Administración nada haga para exonerarse, el fallo será absolutorio**.

Ahora bien, la prueba de la falta puede descomponerse en dos elementos, a saber: primero, la prueba del hecho invocado y, segundo, **la prueba de su carácter anormal, o sea, la prueba de la violación de las obligaciones administrativas**. Esta segunda cuestión es en realidad una operación de calificación jurídica que el actor demanda al juez confirmar, y en la cual interviene la apreciación de éste último.²⁹ (énfasis añadido).

En esa medida, dado que los demandantes no acreditan mediante algún medio probatorio, además de su propia declaración, que los demandados hayan incumplido su contenido obligacional frente a su deber de cuidado y custodia del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.), se tiene que, en aplicación del principio de la carga probatoria, las pretensiones de la demanda están llamadas al fracaso en cuanto los demandantes no acreditaron los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

2.3.1.9. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Se plantea como excepción la culpa exclusiva de la víctima para que, al momento de dictar sentencia, se tenga en cuenta, no sólo la conducta desplegada por los demandantes previo a los lamentables hechos ocurridos el 12 de marzo de 2020, sino que, además, se analice la conducta del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez, en la medida en que éste último tenía 13 años de edad para el momento de su muerte, es decir, tenía capacidad para cometer culpa aquiliana o extracontractual.

La anterior excepción se sustenta con fundamento en el artículo 60 de la Ley 1996 de 2019 “por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” que modificó el artículo 2346 del Código Civil de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2346. Responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieren imputárseles negligencia”. (énfasis

²⁹ Saavedra Becerra, R. (2018). De la responsabilidad patrimonial del Estado. Tomo I. Grupo Editorial Ibañez. Págs. 313-314.

añadido).

En la medida en que el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) tenía 13 años de edad para el momento en que resultó herido, es viable que el despacho analice a lo largo del trámite procesal, si la misma víctima se expuso imprudentemente al riesgo que le arrebató injustamente la vida.

Sobre la culpa o hecho de la víctima en casos como el de marras, es decir, donde se ven involucrados menores de edad, la doctrina especializada ha tenido a bien en decir lo siguiente:

“... si un menor de 12 años, por ejemplo, atraviesa una vía de forma imprudente e intempestiva, razón por la cual es arrollado y se le causa la muerte, si se exigiese culpa de la víctima, el conductor debería responder cabalmente por el deceso. Esta solución no parece la más razonable, en tanto, sin lugar a dudas, la víctima, si no fue la única causa del daño, al menos aportó causalmente a éste, razón por la cual, el requisito exigido, más allá de la culpa de la víctima, debe ser un aporte causal, lo cual, indiscutiblemente, lleva la discusión al ámbito del nexo causal.”³⁰

“se afirma que el principio de causalidad justifica que para apreciar la concurrencia de culpa no sea necesario que la víctima sea capaz de culpa civil y lo que cuenta es su contribución objetiva a la causación del daño. Como es bien sabido, una regla parecida se expresa en España, cuando se afirma que basta con que la conducta de la víctima puede ser considerada “objetivamente negligente” y que con esa conducta haya contribuido a causar el daño.

[...] no es necesario que la víctima sea subjetivamente imputable para que su conducta sea jurídicamente relevante a efectos de reducir la indemnización. Es suficiente, como mucho, que su comportamiento pueda calificarse como negligente objetivamente y que haya contribuido a la producción del daño”³¹

Con la anterior cita doctrinal se quiere significar que, más allá de si el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez tenía o no capacidad para cometer culpa aquiliana, será deber del despacho analizar si tanto él menor como sus padres cometieron algún tipo de imprudencia, negligencia o impericia constitutiva de culpa que pudiese haber influido en los lamentables hechos del 12 de marzo de 2020, culpa que se pudo haber concretado en no haber acatado las instrucciones de los educadores o no haber informado con suficiente anterioridad el riesgo que corría el menor en cuestión.

³⁰ Gaviria Cardona, A. (2021). *El hecho de la víctima como causa de exoneración de la responsabilidad civil*. Grupo Editorial Ibañez. Pág. 37 – 38.

³¹ Martín Casals, M. Pág. 2477 citado por Gaviria Cardona, A. (2021). *El hecho de la víctima como causa de exoneración de la responsabilidad civil*. Grupo Editorial Ibañez. Pág. 38.

Por todo lo anterior, se le solicita respetuosamente al despacho declarar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

2.3.1.10. INIMPUTABILIDAD DE LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES SOLICITADOS

Se plantea la siguiente excepción debido a que los supuestos perjuicios alegados por la parte actora son imputables única y exclusivamente al hecho de un tercero ajeno al servicio público de educación prestado por las demandadas, por lo que se tiene que los perjuicios solicitados son inimputables a éstas últimas.

La imputabilidad del daño antijurídico tiene expresa consagración en nuestro medio, pues lo cierto es que el artículo 90 constitucional exige que el hecho dañoso sea **imputable** al Estado ya sea por acción u omisión, circunstancia que, en opinión de la doctrina nacional, implica que la Administración Pública sólo responda por los eventos dañosos que le sean imputables tanto fáctica como jurídicamente:

“...verificada la existencia de un daño desde la dimensión jurídica, lo relevante es establecer a quién es atribuible esa afectación que sufre una determinada persona en sus derechos, bienes o intereses legítimos. Es precisamente en ese específico escenario donde el término imputación supone un análisis bifronte o dual, consistente en la verificación de que el daño es tanto fáctica (imputatio facti) como jurídicamente (imputatio iure) imputable.

La imputación fáctica tiene como propósito determinar si en el plano material, mas no necesariamente causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Verificado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputación jurídica, esto es, si existe un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico.

En otros términos, la imputación fáctica – y con ella la imputación objetiva del daño – consiste en un estudio retrospectivo que recae sobre la acción u omisión del sujeto, mientras que la imputación jurídica supone la realización de un análisis prospectivo y netamente normativo dirigido a determinar si, una vez establecida la atribución material del daño, existe o no el deber jurídico – subjetivo u objetivo – de resarcir el perjuicio.”³² (énfasis añadido).

Para el caso en concreto, no resulta necesario que el despacho se adentre en los criterios

³² Gil Botero, E. (2020). Tratado de responsabilidad extracontractual del estado (Octava ed.). Tirant lo blanch. Págs. 112 y 113.

normativos que regulan la imputación jurídica de la responsabilidad extracontractual, pues como se ha venido explicando a lo largo de la presente contestación a la demanda, el daño presentado corresponde únicamente al actuar de un tercero ajeno al servicio público educativo.

Ahora bien, y gracia de discusión, para demostrar la inimputabilidad de los perjuicios materiales e inmateriales solicitados por los actores, es preciso tener en cuenta la distinción entre las nociones de daño y perjuicio que, según el profesor Juan Carlos Henao, con apoyo en la doctrina extranjera, consiste principalmente en lo siguiente:

“...el profesor Benoît aportó algunos elementos que se encargaron de definirlo, al afirmar: “...el daño es un hecho: es toda afrenta a la integridad de una cosa, de una persona, de una actividad, o de una situación [...] el perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se derivan del daño para la víctima del mismo. Mientras que el daño es un hecho que se constata, el perjuicio es, al contrario, una noción subjetiva apreciada en relación con una persona determinada” (...). Con esta misma lógica, una sentencia colombiana afirmó que “el daño, considerado en sí mismo, es la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la molestia, el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o en su patrimonio”, mientras que “el perjuicio es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del daño; y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del perjuicio que el daño ocasionó”.³³

Visto lo anterior, es claro que el daño es causa de un resultado que comúnmente denominamos perjuicio, por lo que el aforismo romano “*Accessorium sequitur principale*”, o, “*lo accesorio sigue la suerte de lo principal*”, es plenamente aplicable al caso en concreto, concluyendo que, si el daño sufrido por los demandantes no es imputable a las demandadas, pues mucho menos se le podrá endilgar las consecuencias de dicho menoscabo como son los perjuicios materiales e inmateriales reclamados.

Por todo lo anterior, se le solicita respetuosamente al despacho declarar probada la excepción planteada junto con la causal de exoneración de la responsabilidad extracontractual del Estado denominada hecho de un tercero.

2.3.1.11. INEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS MATERIALES SOLICITADOS

Se plantea la presente excepción en la medida en que, si bien los demandantes solicitan el reconocimiento y pago de diez millones (\$10.000.000) de pesos por concepto de daño emergente, lo cierto es que no allegan al proceso una factura de venta u otro documento similar que reúna los requisitos del Estatuto Tributario y que, de acuerdo con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, pueda acreditar la erogación patrimonial

³³ Henao, J. C. (1998). *El daño* (Primera ed.). Universidad Externado de Colombia. Págs. 76 y 77.

supuestamente sufrida por los actores.

Para sustentar la excepción que se plantea, debe tenerse en cuenta, con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia, que entre los elementos del daño se encuentra que el mismo sea cierto, o, en palabras del ex Consejero de Estado Enrique Gil Botero la certidumbre del daño consiste en lo siguiente:

“Permite comprobar que el daño sea pasado, presente o futuro, y habrá certidumbre cuando sea evidente que produjo o producirá una disminución o lesión material o inmaterial en el patrimonio de quien lo sufre, es decir, no podrá ser resarcido lo eventual, hipotético o meramente posible.”³⁴

De igual forma, obsérvese que frente al daño emergente los actores no aportan ninguna factura o prueba documental similar que, en virtud del Estatuto Tributario, pruebe las erogaciones que realizaron con ocasión del supuesto daño antijurídico sufrido.

La inexistencia de facturas o documentos similares que sustenten las erogaciones sufridas (daño emergente), en palabras del H. Consejo de Estado, conduce inexorablemente al fracaso de la pretensión:

“A título de daño emergente les fue concedido a los demandantes el valor de dos millones seiscientos doce mil cuatrocientos sesenta y un pesos (\$2.612.461), por las reparaciones realizadas al vehículo una vez les fue entregado.

*La Sala modificará esta disposición del fallo apelado para, en su lugar, disponer que no hay lugar a que se indemnice por ese concepto. Esto por cuanto **ninguna de las documentales aportadas con el fin de sustentar esas erogaciones** (fls. 69 y s.s., c. 8) **reúne los requisitos previstos en el artículo 617 del Estatuto Tributario³⁵, en especial los relativos a la calidad de retenedor del vendedor, ni la discriminación del IVA, siendo obligación del comprador exigir la factura de compra de conformidad con los requisitos legales.** De tal manera, **ninguna***

³⁴ Gil Botero, E. (2020). *Tratado de responsabilidad extracontractual del estado* (Octava ed.). Tirant lo blanch. Pág. 189.

³⁵ Estatuto Tributario, “Art. 617. Requisitos de la factura de venta.

Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.

c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.

e. Fecha de su expedición.

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.

g. Valor total de la operación.

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas”.

credibilidad otorgan los recibos informales aportados sobre la veracidad de las transacciones sobre las que versan, ni puede reconocérseles valor cuando no cuentan con los requisitos previstos en la ley para su validez.

Por ende, **no hay lugar a reconocimiento indemnizatorio alguno por concepto de las sumas presuntamente erogadas por los demandantes** para la refacción del rodante.”³⁶ (énfasis añadido).

De igual forma, es pertinente recordar, que el artículo 225 del Código General del Proceso, aplicable a la presente controversia por remisión del artículo 211 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, limitó la eficacia del testimonio para probar el pago de obligaciones, por lo que los demandantes no pueden acreditar el daño emergente solicitado mediante otra prueba que no sea la documental (factura) so pena de que el despacho aprecie la inexistencia de dicho documento como un indicio grave de la inexistencia del respectivo pago que se alega. El artículo en mención es del siguiente tenor:

“Artículo 225. Limitación de la eficacia del testimonio. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.

Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión.” (énfasis añadido).

Por lo anterior, y con apoyo en la jurisprudencia traída a colación, se le solicita respetuosamente al despacho negar los perjuicios materiales (daño emergente), en tanto los actores no allegan la prueba necesaria para acreditar su existencia.

2.3.1.12. EXCESIVA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS INMATERIALES (MORALES Y DAÑO A LA SALUD) SOLICITADOS

Se plantea la siguiente excepción ya que, si bien los perjuicios materiales e inmateriales no son imputables al actuar de las entidades demandadas, la tasación realizada por los actores resulta excesiva en desmedro de la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado desde el 28 de agosto de 2014.

³⁶ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 28 de mayo de 2015. Consejero Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Radicado No. 18001-23-31-000-2001-00154-01(33732)

Para el caso en concreto, la parte actora solicita los siguientes perjuicios inmateriales en su modalidad de perjuicios morales y daños a la salud:

“POR PERJUICIOS MORALES ó PRETIUM DOLORIS: Se debe a CADA UNO DE LOS DEMANDANTES o a quien sus derechos representare, el equivalente a TRESCIENTOS (300) SMMLV a la fecha de la ejecutoria de la providencia que ponga fin al presente proceso; en relación al profundo trauma afectivo, moral y espiritual que dejo consigo la repentina muerte del menor JHON DEIVI APONZA RAMIREZ.

c) POR DAÑO A LA SALUD: se debe a favor de debe a CADA UNO DE LOS DEMANDANTES o a quien sus derechos representare, el equivalente a TRESCIENTOS (300) SMMLV a la fecha de la ejecutoria de la providencia que ponga fin al presente proceso; pues la repentina muerte del menor no solo afectó de manera emocional a cada uno de los demandantes, sino que generó en ellos un trastocamiento psicofísico que alteró en términos negativos sus vidas.”

La anterior tasación resulta excesiva y desproporcionada por las razones que se pasan a exponer.

Primero, frente al perjuicio moral, es conveniente recordar que en el documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 que consagró los referentes para la reparación de perjuicios inmateriales, se establecieron los siguientes topes:

“2.1 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE

Para la reparación del daño moral, en caso de muerte, se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas.

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio (100 smmlv).

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.

La siguiente tabla recoge lo expuesto:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE REGLA GENERAL					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
	Relaciones afectivas conyugales y paterno filiales	Relación afectiva del 2° de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3° de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4° de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

Para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva. Para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.”

Como se observa, jurisprudencialmente, se encuentran limitados los topes indemnizatorios en 100 SMMLV, por lo que la solicitud realizada por los demandantes desconoce dicha jurisprudencia unificada y, por ende, resulta a todas luces improcedente.

Ahora bien, en segundo lugar y frente al daño a la salud, además de que los demandantes no se encuentran legitimados para solicitar dicha tipología de perjuicio inmaterial pues, no son las víctimas directas del presunto daño antijurídico que se demanda, se tiene que, de igual forma, dicha solicitud indemnizatoria excede los topes fijados por la jurisprudencia unificada del H. Consejo de Estado.

Frente a la legitimación en la causa para solicitar el daño a la salud, el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014³⁷ y en providencias posteriores ha

³⁷ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena – Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Consejera Ponente: Stella Conto Diaz del Castillo. Radicado No. 23001-23-31-000-2001-00278-01(28804). Actor: AMPARO DE JESUS RAMIREZ SUAREZ. Demandado: HOSPITAL SAN VICENTE

dejado en claro que el único beneficiario de dicho perjuicio inmaterial es la víctima directa:

*"La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 expediente 28.804 estableció el contenido y alcance del **daño a la salud entendido como perjuicio inmaterial que puede solicitar la víctima directa** en supuestos en los cuales el daño antijurídico consiste en la lesión física o psíquica, igualmente la decisión definió la siguiente metodología y topes indemnizatorios³⁸:*

"La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD REGLA GENERAL	
Gravedad de la lesión	Víctima directa
	S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

DE PAUL DE LORICA Y OTRO. Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE REPARACION DIRECTA

³⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp 28.804, MP Stella Conto Díaz del Castillo.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima.

(...) En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 S.M.L.M.V. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables referidas”.³⁹ (énfasis añadido).

Como se observa, el único legitimado para solicitar el daño a la salud es la víctima directa, es decir, el perjudicado directo de la lesión psicofísica en cuestión, por lo que se tiene que ninguna de las personas que integran el extremo activo de la presente litis estarían legitimadas para solicitar tal perjuicio.

De igual forma, y en gracia de discusión, es pertinente traer a colación la prohibición consagrada en el documento final del 28 de agosto de 2014 que expresa lo siguiente “ningún daño o perjuicio inmaterial podrá ser indemnizado doblemente”, circunstancia que es lógica a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, pues, como lo menciona el profesor Juan Carlos Henao, el daño y sólo el daño debe ser indemnizado:

“... EL DAÑO DEBE SER INDEMNIZADO PLENAMENTE

La enunciación de la presente regla es simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño”, o, en palabras de la Corte Constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite”. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento.”

³⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Consejero Ponente: Freddy Ibarra Martínez. Radicado No. 05001-23-31-000-2007-02409-01(52180). Actor: MARÍA MARGARITA GIRALDO GIRALDO Y OTROS. Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL. Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

El hecho de que los demandantes recibieran una indemnización por perjuicios morales y otra por daño a la salud, cuando ni siquiera están legitimados para solicitar ésta última tipología de perjuicio inmaterial, no sólo contravendría la jurisprudencia unificada del H. Consejo de Estado, sino que, además, atentaría contra el principio de la prohibición del enriquecimiento sin justa causa y la indemnización integral.

Por todo lo anterior, y en el remoto e hipotético caso que se decida acceder a las infundadas pretensiones de la demanda, el despacho debe proceder a tasar los perjuicios solicitados de conformidad con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y a negar perjuicios improcedentes como es el caso del daño a la salud.

2.3.1.13. GÉNERICA Y OTRAS

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso incluida la caducidad del medio de control de reparación directa y la culpa y/o hecho exclusivo de las víctimas como causal de exoneración de responsabilidad extracontractual del Estado.

III. CAPÍTULO III. CONTESTACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

3.1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

- 3.1.1.** Es cierto que el Municipio de Popayán fue demandado por la señora Dominga Ofelia Landa y Otros a través del medio de control de reparación directa.
- 3.1.2.** Si bien es cierto que los demandantes imputan responsabilidad de forma solidaria a las demandadas por los presuntos perjuicios morales, materiales y demás formuladas en la demanda primigenia que cursa en el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán bajo el radicado No. 19001-33-33-009-2021-00145-00, lo cierto es que no se encuentran demostrados los presupuestos de la responsabilidad extracontractual de las demandadas y mucho menos puede existir solidaridad entre ellas por las razones que se anotaron en el acápite de excepciones de fondo propuestas dentro de la contestación a la demanda.
- 3.1.3.** Si bien es cierto que presuntamente el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) fue herido por un artefacto desconocido el día 12 de marzo de 2020, lo cierto es que dicho evento se encuadra dentro de los elementos de la causal de exoneración de responsabilidad extracontractual del Estado denominada hecho de un tercero, por lo que el fatídico evento no puede ser endilgado de ninguna manera al actuar de las entidades demandadas.

3.1.4. Es cierto. La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 435-74-994000009675 cuyo tomador fue el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y como asegurado fue el Municipio de Popayán amparó *“los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del c CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2021800000737 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON OBJETO: GARANTIZAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO PARA ATENDER 509 CUPOS DISTRIBUIDOS EN LOS RESGUARDOS DE POBLAZON Y QUINTANA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2500 DE 2010”*

3.1.5. No es un hecho. No obstante, debe hacerse la precisión de que el 12 de marzo de 2020 ocurrió el fatídico hecho donde el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) salió lastimado y hasta el 30 de marzo de 2022, es decir, dos (2) años y veintisiete (27) días después se realizó el llamamiento en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia, por lo que las acciones derivadas del contrato de seguro se encontrarían prescritas de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio.

3.2. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

3.2.1. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA ÚNICA PRETENSIÓN: Respetuosamente manifiesto que, **ME OPONGO** a que la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA tenga que pagar y/o reembolsar total o parcialmente el pago que tuviese que hacer el Municipio de Popayán en caso de llegarse a condenar la entidad territorial demandada, ello como consecuencia de que no está acreditada la falla del servicio para el caso en concreto, las lesiones del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) son imputables al hecho de un tercero ajeno a la Administración Municipal y, por ende, no se materializó el riesgo amparado en la póliza que sirvió de fundamento para la vinculación de mi representada.

No obstante lo anterior, si llegara a surgir la necesidad de resolver lo concerniente a la relación sustancial que sirve de base a la convocatoria que se hizo respecto de mi representada, pese a la evidente inexistencia de una falla del servicio, y la existencia del hecho de un tercero, solicito que, sin que esta observación constituya aceptación de responsabilidad alguna, sino que por el contrario **OPOSICIÓN**, se verifique por parte del señor Juez, circunstancias como: i) límites y coberturas acordadas; ii) condiciones particulares de la póliza y sus respectivas exclusiones; y iii) prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, entre otras, en el remoto evento de que prosperen una o

algunas de las pretensiones formuladas por el apoderado en su libelo demandatorio.

3.3. EXCEPCIONES FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

3.3.1. EXCLUSIONES PACTADAS EN LA PÓLIZA No. 435-74-994000009675

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 435-74-994000009675 contempló las siguientes exclusiones: **“MUERTE, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASION, HUELGA, MOTINES, CONMOCION CIVIL, PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO, COACCION, MANIFESTACIONES PUBLICAS, TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCION DE BIENES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, DISTURBIOS POLITICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT) Y TERRORISMO.”** (énfasis añadido). En la medida en que la muerte del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) obedeció al acto de un tercero dirigido a causar daño, se tienen que dicho riesgo fue expresamente excluido del amparo otorgado por la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, por lo que no debe surgir ninguna obligación o deber, ya sea contractual o legal, a cargo de mi representada frente a las sumas reclamadas dentro del proceso de la referencia.

Para sustentar la excepción que se plantea, debe tenerse en cuenta que la libertad contractual consagrada en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1602 del Código Civil tiene directa aplicación en materia aseguradora cuando el estatuto mercantil de 1971 expresa de manera claro que:

*“Con las restricciones legales, **el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos** a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”*

Dicho artículo evoca los amparos, o, exclusiones, a las que las partes puedan llegar libremente en el marco de su autonomía privada. Según la doctrina nacional, la segunda forma en que se manifiesta la libertad contractual de las partes en el negocio jurídico del seguro, esto es la exclusión, consiste en lo siguiente:

“La exclusión es la forma lícita de reducir el riesgo, esto es de limitarlo, de manera que se concreta a ciertas cosas o hechos, pero no abarca ni se extiende a otros. Por consiguiente, sólo el riesgo contratado queda amparado, y quedan por fuera de tal amparo o protección aquellos que, aun siendo asegurables, los contratantes los han excluido expresamente.”⁴⁰

⁴⁰ Becerra Toro, R. (2014). Nociones fundamentales de la teoría general y regímenes particulares del contrato de seguro. Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Jurídica y Política, Carrera de Derecho. Pág.190.

Las exclusiones en el contrato de seguro también han sido explicadas por la jurisprudencia nacional poniendo de presente lo siguiente:

*“La finalidad del contrato de seguro y a lo que apunta la intención común de los contratantes de este tipo de negocios jurídicos es obtener cobertura frente a determinados riesgos, cuya realización conduce al pago de la respectiva indemnización (art. 1054 del C. de Co.). Es claro también que el acuerdo de las partes para que se brinde amparo a una determinada clase de riesgos determina que, en principio, todos aquellos sucesos inciertos que se enmarquen dentro de los parámetros así establecidos sean objeto de la correspondiente cobertura. Sin embargo, es igualmente evidente, por así disponerlo la legislación nacional (art. 1056 del C. de Co), que en el contrato de seguro, y, particularmente, por determinación del asegurador, éste, teniendo presentes las restricciones legales, “podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”. En razón de lo anterior, los riesgos cubiertos en el contrato de seguro serán los que correspondan a la clase de amparo que genéricamente se ofrezca, o los que las partes de manera particular y explícita convengan adicionar, **siempre y cuando, en uno u otro caso, respecto de los mismos no se establezca expresamente una exclusión por determinación del asegurador, claro está, aceptada por el tomador al perfeccionar la celebración del respectivo contrato.**”⁴¹ (énfasis añadido).*

Otro tanto ha dicho la jurisprudencia arbitral⁴² sobre el particular:

“4.1 La delimitación del riesgo en el contrato de seguro. Su trascendencia en la esfera aseguraticia:

Sobre este particular, sea lo primero anotar que, como bien es sabido, la posibilidad de delimitar el riesgo en el contrato de seguro, traza, in potentia, el cauce de la obligación indemnizatoria del asegurador, como quiera que, en puridad, esta última se encuentra justamente condicionada a la realización del riesgo asegurado -o los riesgos asegurados- y, en consecuencia, mientras dicha condición no se cumpla en la praxis contractual, el correspondiente deber de prestación no surgirá a la vida jurídica⁴³; ello obedece, en sana lógica, a la posibilidad con que cuenta el asegurador

⁴¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2008. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Radicado No. 11001-3103-012-2000-00075-01.

⁴² Laudo del 15 de diciembre de 2009 Tribunal de Arbitramento Quala S.A. Vs. Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A.

⁴³ Desde el ángulo inmediatamente señalado, como bien lo anota el profesor Abel B. Veiga Copo, "... pueden definirse las cláusulas delimitadoras como aquellas que sirven para definir y concretar el objeto del contrato del seguro de que se trate, de manera que todo acontecimiento o evento acaecido fuera de aquella delimitación, o que constituya una circunstancia de exclusión de cobertura, no tendrá la consideración de

*de delimitar el estado del riesgo, institución estructural del de la relación aseguraticia y una de las figuras en las que descansa el seguro considerado in globo, esto es, desde una perspectiva técnica, financiera y jurídica, habida cuenta de que, en principio, per se, naturalmente con excepciones, "... ningún asegurador estará dispuesto a asegurar todos los riesgos que puedan afectar a nuestras cosas o a nuestro patrimonio ..."*⁴⁴.

*Así, si se parte de la base de que " ... la prestación del asegurador(...) va a depender de la producción del evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, es decir, de un hecho futuro e incierto, al menos en una forma relativa, en el sentido de que puede tratarse de un evento que se sabe que se va a producir pero no cuándo (..) y de que el riesgo es objeto de la cobertura dentro de los límites pactados, de manera que es el riesgo que se encuentra dentro de los límites y de las modalidades establecidas en el contrato, el que, como riesgo asegurado, condiciona la obligación del asegurador ... "*⁴⁵, resulta palmario que "... la posibilidad de limitación de los riesgos es indispensable para el asegurador (...) teniendo presente que sólo se llega a definir cada riesgo y a limitarlo con precisión, si puede medirse y apreciarse su valor para fijar la suma asegurada, la prima y la indemnización o el beneficio: sólo se puede agruparlos en mutualidad y realizar su compensación, si es posible efectuar una clasificación exacta de los riesgos..."⁴⁶ (énfasis añadido).

De conformidad con la abundante doctrina y jurisprudencia citada *in extenso*, se observa que la póliza No. 435-74-994000009675 y su clausulado general contemplaron las siguientes exclusiones:

siniestro cubierto por la póliza ... ". Condiciones en el contrato de seguro, Editorial Comares, Granada, 2005, p.278.

⁴⁴ GARRIGUES, Joaquín. Contrato de Seguro Terrestre. Ed. Aguirre. Madrid. 1982. p.144; a lo anterior, el profesor Garrigues agrega, con diáfana claridad, que " ... al cerrar el contrato, las partes han de estar, pues, de acuerdo sobre los hechos amenazadores, cuya realización engendrará la acción de resarcimiento frente al asegurador. Y es el tomador del seguro quien ha de describir las circunstancias del riesgo, no el asegurador (de aquí la carga de la exacta declaración previa al contrato). Una vez conocidas las circunstancias que sirvan para individualizar el riesgo, su apreciación o estimación incumbe exclusivamente al asegurador, quien, como resultado de este juicio, podrá determinar el grado de probabilidad del siniestro de ese juicio, podrá determinar el grado de probabilidad del siniestro y decidirá si acepta o no reparar sus consecuencias (...) Pero en cada contrato es inexcusable concretar las circunstancias que permitirán decidir si un determinado hecho dañoso entra dentro del riesgo o riesgos previstos en el contrato. Este principio, llamado "principio individualización del riesgo", no significa, sin embargo, que cada contrato de seguro haya de referirse a un riesgo único ... ". Ibídem, pp.144-145.

⁴⁵ SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Ley de Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 de 1980, de 8 de octubre y sus modificaciones. Aranzadi Editorial. Navarra. 1999. p.33; a lo que el profesor Sánchez Calero agrega que en el seguro se " ... ha de individualizar el riesgo que se quiere asegurar, que depende de la naturaleza del evento que se pretende asegurar y del interés sobre el cual debe verificarse el evento, debiendo producirse en el contrato una delimitación de ese riesgo, con precisión de las causas del evento, el tiempo y el espacio en que debe verificarse (...) las cláusulas establecidas en el contrato no limitan 'los derechos del asegurado, sino que delimitan el riesgo asumido en el contrato, su contenido, el ámbito al que el mismo se extiende', lo que constituye un límite objetivo nacido de la voluntad pactada de las partes ... ". Ibídem, p.33.

⁴⁶ HALPERIN, Isaac. Seguros. Exposición crítica de la ley 17.418. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1972. p.342.

“CLÁUSULA SEGUNDA. EXCLUSIONES

LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARA:

(...)

9. **MUERTE**, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES **CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR** GUERRAS, INVASION, HUELGA, MOTINES, CONMOCION CIVIL, PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO, COACCION, MANIFESTACIONES PUBLICAS, TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCION DE BIENES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, DISTURBIOS POLITICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, **ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT) Y TERRORISMO**” (énfasis añadido).

Debido a que los hechos que son materia de estudio por parte del despacho coinciden con la exclusión pactada, es decir, la muerte del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) obedeció al acto malintencionado de un tercero, o, en su defecto, a un acto terrorista, se tiene que la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, en virtud de su libertad contractual y en su delimitación de los riesgos asumidos, decidió **NO AMPARAR** el riesgo de que los estudiantes atendidos con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2021800000737 fueran heridos por actos malintencionados de terceros.

Por todo lo anterior, se le solicita al despacho declarar probada la excepción planteada declarando que la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa no tiene el deber legal o contractual de asumir una eventual condena que se profiera dentro del proceso de la referencia como consecuencia de la exclusión pactada en la póliza No. 435-74-994000009675 que excluyo los hechos *sub judice* de la cobertura otorgada por mi representada.

3.3.2. INEXISTENCIA DE AMPARO Y CONSECUENTE INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA EN TANTO NO SE CONFIGURÓ EL RIESGO ASEGURADO

En la medida en que los hechos materia del presente litigio fueron excluidos de la cobertura material otorgada en la póliza No. 435-74-994000009675, se puede concluir la inexistencia de amparo y consecuentemente la inexigibilidad de la obligación indemnizatoria, en tanto no se ha configurado el riesgo que fue asegurado por la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.

Para sustentar la presente excepción, que es, a su vez, una consecuencia necesaria y

lógica de la excepción planteada anteriormente, debe tenerse en cuenta que el contrato de seguro por definición legal tiene como elementos esenciales el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador, en ausencia de dichos elementos, el artículo 1045 del Código de Comercio dispone que el contrato no producirá efecto alguno. Sobre el elemento esencial del riesgo en el contrato de seguro, la doctrina especializada ha comentado lo siguiente:

“El riesgo por expreso reconocimiento legislativo en Colombia, es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro (C. de Co., art. 1045); sin vacilación, el de mayor prosapia o abolengo, por cuanto toda la operación del seguro, ora directa ora indirectamente, apunta hacia el riesgo, su ratio. Es, sin más calificativos, su bastión, su mástil, su columna vertebral o, si se prefiere, su ‘materia prima’, como gráficamente es denominada por un sector de la doctrina.

Nuestro estatuto entiende que el riesgo, examinado a través del prisma jurídico, por oposición al técnico, es “[...] el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario” (C. de Co., art. 1054).

(...)

*El riesgo (extracontractual y real, en estado asegurable), sin mayores pretensiones académicas -según lo precisamos en oportunidad anterior- es la posibilidad de un acontecimiento, de un suceso de posible realización tanto en el tiempo como en el espacio, al cual las partes intervinientes en el negocio asegurativo, merced a su inobjetable latencia, deciden dota, para el supuesto de su materialización, de eficacia jurídica, de fisonomía y relevancia patrimonial (riesgo asegurado, riesgo contractual, equivale a la expresión álea), **Es pues el evento previsto -configurado o esculpido- por las partes contratantes.**” (énfasis añadido).*

Teniendo en cuenta la definición doctrinal del riesgo como elemento esencial del contrato de seguro, se tiene que la póliza No. 435-74-994000009675 contempló únicamente los siguientes amparos:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 175,560,600.00		
		175,560,600.00		

Dichos amparos deben ser interpretados de conformidad con las exclusiones que se expusieron anteriormente:

9. MUERTE, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASION, HUELGA, MOTINES, CONMOCION CIVIL, PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO, COACCION, MANIFESTACIONES PUBLICAS, TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCION DE BIENES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, DISTURBIOS POLITICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT) Y TERRORISMO.

Como se observa, si bien el amparo contratado fue Predios, Labores y Operaciones, se tiene que de ese amparo se excluyeron todos los riegos, en especial la muerte, causados directa o indirectamente por actos malintencionados de terceros, por lo que se puede concluir fácilmente la inexistencia de un amparo frente a los hechos en los que murió el estudiante Jhon Deivi Aponza Ramírez (q.e.p.d.) y, por ende, la inexigibilidad de la obligación condicional a cargo de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa, en tanto no se configuró ninguno de los riesgos asegurados.

3.3.3. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

Para el caso en concreto se configuró el fenómeno prescriptivo bienal contemplado en el artículo 1081 del Código de Comercio, en tanto que, entre el conocimiento del hecho que dio base a la acción (muerte del menor Jhon Deivi Aponza Ramírez – 12 de marzo de 2020) y el llamamiento en garantía realizado por el Municipio de Popayán a la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa (30 de marzo de 2022) transcurrieron más de dos (2) años.

Para sustentar la excepción propuesta, debe tenerse en cuenta que nuestro estatuto mercantil dispone en su artículo 1081 lo siguiente:

“Artículo 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”

Sobre los dos tipos de prescripción establecidos en el artículo anterior, la doctrina nacional especializada, con apoyo en la jurisprudencia, ha mencionado lo siguiente:

“A) La prescripción, en general, y la extintiva en el derecho de seguros. Artículo 1081 del Código de Comercio

(...)

En lo que atañe al contrato de seguro, el Código de Comercio se ocupó, en su artículo 1081, de regular el tema de la prescripción de las acciones derivadas del mismo o de las normas legales que lo disciplinan, erigiéndose, por tanto, en la regla general sobre la materia. Al respecto, estatuyó que “podrá ser ordinaria o extraordinaria” (inc. 1º) y dispuso que la primera “será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción” (inc. 2º), mientras que la extraordinaria “será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho” (inc. 3º).

Potísimas razones de seguridad jurídica, entre otras más, condujeron a establecer dicho sistema específico, el cual apunta a que la extinción de las acciones o derechos en el campo asegurativo, igualmente no se torne indefinida. Sobre el particular, la Comisión Revisora del proyecto de Código de Comercio de 1958, que sirvió de antecedente al estatuto mercantil vigente, expresó:

“Esta materia fue objeto de esmeradas cavilaciones. Se tuvo en mientes el principal fundamento filosófico-jurídico de la prescripción, que no es otro que la necesidad de darles consistencia y estabilidad a las situaciones jurídicas. Igualmente tuvimos en cuentas las conveniencias de las partes que intervienen en el contrato de seguro.

“Optamos por establecer dos clases de prescripción, una ordinaria y otra extraordinaria [...] La ordinaria empieza a contarse desde el momento en que se tiene conciencia del derecho que da nacimiento a la acción. No corre contra los incapaces [...]

“Para quien no tiene conocimiento de él, cualquier término puede considerarse corto, pero el orden jurídico exige que se fije uno cualquiera. El de cinco (5) años es razonable. Y debe correr contra toda clase de personas.

“Ventajoso para el asegurador, porque después de transcurridos cinco años desde la fecha del siniestro, puede disponer de la reserva correspondiente. Desventajoso, porque al vencerse ese término, ya no podrá alegar la nulidad del contrato por vicios en la declaración de asegurabilidad” (...)

Ese sistema plural, a la par que especial -con prescindencia de su real pertinencia genética y funcional-, dueño de una arquitectura ciertamente peculiar, ha exigido de la doctrina y la jurisprudencia sistemático y detenido estudio, con el propósito de identificar las características y la forma de aplicación de cada tipología de prescripción, así como los aspectos que intrínsecamente las diferencian. Sobre el particular, pertinente es tener en cuenta:

a) En primer término, que una y otra clase prescripción ostentan diferente naturaleza, pues en tanto la **ordinaria se estructura como subjetiva**, la extraordinaria, por el contrario, se muestra netamente objetiva, como quiera que, in toto, se torna refractaria a cualquier consideración de otro tipo. Ello es así, en la medida en que la comentada disposición hizo depender, la primera, **del conocimiento “que el interesado haya tenido o debido tener del hecho que da base a la acción”** y en la segunda, del “momento en que nace el respectivo derecho”. En tal virtud, la operancia de aquélla implica el “conocimiento” real o presunto por parte del titular de la respectiva acción, en concreto, de la ocurrencia del hecho que la genera, cuestión que dependerá, por tanto, no del acaecimiento del mismo, desde una perspectiva ontológica y, por ende, material, sino del instante en que el interesado se informó de dicho acontecer o debió saber de su realización, vale decir desde que se volvió cognoscible, o por lo menos pudo volverse (enteramiento efectivo o presuntivo, respectivamente). En cambio, el precitado precepto señaló que la prescripción extraordinaria irrumpirá a partir del surgimiento, en el cosmos jurídico, del respectivo derecho, independientemente de cualquier enteramiento que sobre su existencia tenga o no el titular; basta pues su floración, como tal, para que la prescripción extraordinaria empiece a correr. De ahí su caracterizada y anunciada objetividad, que se contrapone, por completo, a la más mínima subjetividad. En esta materia, en consecuencia, no hay pues términos medios, ni ningún hibridismo o mixtura. En un todo de acuerdo con la conocida y aludida voluntas legislatoris.

(...)

e) Para la primera, el anotado término de dos años irrumpe desde cuando el titular conoció o debió conocer de la ocurrencia del hecho que habilita su ejercicio, como ya tangencialmente se mencionó. Al respecto, desde un ángulo jurídico-temporal, pertinente es destacar que uno es el momento de la ocurrencia del hecho y otro aquél en que el accionante supo o debió saber de su acaecimiento, sin perjuicio, claro está, de que en casos específicos, como suele suceder con inusitada frecuencia en la praxis, puedan darse las dos circunstancias en un mismo tempus. La extraordinaria se inicia a partir de cuando nace el derecho, objetivamente considerado. Por ello, conforme ya se observó, opera frente a toda clase de personas y al margen de cualquier conocimiento (real o efectivo, presunto o presuntivo).⁴⁷ (énfasis añadido).

En ese sentido, para el caso en concreto, el conocimiento del hecho que dio base a la acción del contrato de seguro, fue o debió ser conocida por el Municipio de Popayán el

⁴⁷ Jaramillo Jaramillo, C. I. (2013). Derecho de seguros. Tomo IV. Editorial Temis S.A. - Pontificia Universidad Javeriana. Pág. 567 y siguientes.

mismo día de su ocurrencia, es decir, el día 12 de marzo de 2020, por lo que el fenómeno de la prescripción bienal transcurrió hasta el día 12 de marzo de 2022.

Se arriba a la anterior conclusión frente al conocimiento del hecho que dio base a la acción derivada del contrato de seguro, dado que los hechos del 12 de marzo de 2020, donde resultó lesionado el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez ocurrieron dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Poblazón, por lo que el conocimiento del hecho de cual pendía la acción derivada del contrato de seguro fue de conocimiento inmediato por parte de la entidad territorial asegurada.

A pesar de que la prescripción bienal se verificó el día 12 de marzo de 2022, el Municipio de Popayán formuló llamamiento en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa en virtud de la póliza No. 435-74-994000009675 hasta el día 30 de marzo de 2022, es decir, diecisiete (17) días después de que se habían consumado la prescripción ordinaria que contempla el artículo 1081 del Código de Comercio:

30/3/22, 17:02

Correo: Juzgado 09 Administrativo - Cauca - Popayan - Outlook

Memorial Llamamiento en Garantía - Proceso 2021-145

FERNANDO GARCIA <fernandogarciaalderon@hotmail.com>

Miércoles 30/03/2022 4:27 PM

Para: Juzgado 09 Administrativo - Cauca - Popayan

<jadmin09ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co>;fernando.garcia@popayan.gov.co <fernando.garcia@popayan.gov.co>

Cordial saludo.

En calidad de apoderado del Municipio de Popayán por medio del presente se llama en garantía a la Aseguradora Solidaria De Colombia Ltda, en los términos del memorial adjunto (21 folios – Llamamiento en garantía y anexos)

Referencia: Llamamiento en garantía
Expediente: 19001-33-33-009-2021-00145-00
Demandante: Dominga Ofelia Landa y otros
Demandado: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y otros
Medio de Control: Reparación Directa

Con el acostumbrado respeto,

DECIO FERNANDO GARCÍA CALDERÓN
Abogado

Por todo lo anterior, se le solicita respetuosamente al despacho declarar probada la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro materializado en la póliza No. 435-74-994000009675 de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio.

3.3.4. LA PÓLIZA No. 435-74-994000009675 ÚNICAMENTE AMPARO PERJUICIOS MATERIALES

En el hipotético y remoto caso que el despacho decidiera afectar la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 435-74-994000009675 debe tenerse en cuenta que la misma únicamente amparó perjuicios materiales:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS				
ASEGURADO: MUNICIPIO DE POPAYAN NIT : 891580006				
ITEM: 1	DEPARTAMENTO: CAUCA	CIUDAD: POPAYAN		
DIRECCION: CALLE 0 No. 0-0				
ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO		TIPO DE RIESGO: ESTATAL	MANZANA: -1-10	
DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 175,560,600.00	175,560,600.00	
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES				
BENEFICIARIOS				
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS				
Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del c CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2021800000737 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON OBJETO: GARANTIZAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO PARA ATENDER 509 CUPOS DISTRIBUIDOS EN LOS RESGUARDOS DE POBLAZON Y QUINTANA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2500 DE 2010				

En ese sentido, y sin que lo anterior constituya aceptación de responsabilidad de ningún tipo, en el hipotético y poco probable caso de que se encuentre responsable a la entidad territorial demandada, la compañía aseguradora no debe asumir las eventuales condenas que se produzcan frente a los perjuicios inmateriales reclamados como lo son los morales y el daño a la salud.

3.3.5. DEDUCIBLE PACTADO EN LA PÓLIZA No. 435-74-994000009675

La profesora María Cristina Isaza Posse refiriéndose a la jurisprudencia arbitral y a la doctrina nacional, define el concepto de deducible en el contrato de seguro de la siguiente forma:

“La jurisprudencia arbitral colombiana se ha referido al deducible de la siguiente manera.”⁴⁸

3.5.3. El deducible en el contrato de seguro

*El artículo 1079 del Código de Comercio establece que “el asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”. De allí se desprende que, en primer lugar, la responsabilidad del asegurador está limitada, cuantitativamente, al monto de la suma asegurada. Sin embargo, **en ejercicio de la autonomía privada, también es posible pactar que el asegurado asuma un porcentaje o una cuota del riesgo que pretende trasladar a la aseguradora.** Las convenciones en ese sentido se denominan “deducible” y se encuentran definidas en el artículo 1103 del Código de Comercio como las “cláusulas según las cuales el asegurado debe soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño”. **Se trata, entonces, de la participación del asegurado en la asunción de los efectos patrimoniales del siniestro, que puede pactarse como una suma fija o como un porcentaje del valor asegurado. Como su nombre lo indica tal importe será “deducido” de la suma que la aseguradora debe reconocerle al asegurado, puesto que está a cargo de este último.***

⁴⁸ Laudo Arbitral. Colpensiones contra AXA Colpatria Seguros S.A. Diciembre 22 de 2020. Árbitros: Arturo Solarte Rodríguez; Juan Carlos Esguerra Portocarrero; Alejandro Venegas Franco.

La doctrina ha definido el deducible como “la primera parte de la pérdida que el asegurado asume sobre el monto indemnizable de un siniestro. Puede consistir en una suma fija o en un porcentaje del quantum de la indemnización o en una combinación de ambos”.⁴⁹ En este sentido opera como un mecanismo para compartir los riesgos entre la aseguradora y el asegurado, quien deberá soportar una porción de la pérdida. En consecuencia, en cada caso habrá que analizar el pacto de las partes para determinar el valor efectivo que la aseguradora debe pagar, luego de aplicar el deducible correspondiente”.⁵⁰

Para el caso en concreto, se tiene que la póliza No. 435-74-994000009675 contemple los siguientes deducibles:

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

Por ello, y en el hipotético y poco probable evento de que se emita sentencia condenatoria, se le solicita respetuosamente al despacho aplicar el deducible pactado, declarando que el asegurado tiene que soportar las consecuencias económicas del siniestro en los porcentajes previamente mencionados.

3.3.6. GENÉRICA Y OTRAS

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso ya sea frente a la demanda o incluso ante el llamamiento en garantía.

IV. OPOSICIÓN A LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN LA DEMANDA

4.1. Frente a las pruebas documentales solicitadas

En la demanda se solicitan las siguientes pruebas documentales:

“Oficiese al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán, para que con destino a este proceso se sirvan remita copia íntegra y completa de la historia clínica del menor JHON DEIVI APONZA REMIREZ, quien en vida se identificaba con el NUIP. 1.061.714.677.

Oficiese a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cauca, para que con destino a este proceso se sirva llegar copia íntegra investigación penal identificada bajo el número de radicado 190016000602202000592, adelantada como consecuencia de

⁴⁹ Narváez Bonnet, Jorge Eduardo. El contrato de seguro en el sector financiero. Tercera edición. Bogotá: Ed. Grupo Editorial Ibáñez, 2014, p.373

⁵⁰ Isaza Posse, M. C. (2021). El deducible en el seguro de responsabilidad civil en Colombia. Revista Ibero-Latinoamericana De Seguros, 30(54). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris54.dsrc>

la muerte del menor JHON DEIVI APONZA REMIREZ (+), quien en vida se identificaba con el NUIP. 1.061.714.677

Ofíciase a la registraduría Nacional del Estado Civil, Tumaco, Nariño, para que con destino a este proceso se allegue copia del Registro Civil de Nacimiento de MARCIA MILAGRO VALENCIA LANDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 59.679.066

Ofíciase a la Alcaldía Municipal de Popayán, para que con destino a este proceso ser sirva allegar copia íntegra y completa de todas las actuaciones administrativas, convenios y contratos que se hayan celebrado entre el Municipio de Popayán y el Consejo Regional Indígena del Cauca relacionados con la Institución Educativa Poblazón Popayán NIT. 817005319-0 (Wawa Khary Pacha Mama), durante la vigencia del año 2020.

La Alcaldía Municipal de Popayán, por intermedio de la Secretaría de Educación Municipal de Popayán, se servirá informar cuáles o qué tipo de acciones son impartidas por la Administración Municipal a las Instituciones Educativas a fin de prevenir riesgos, agresiones y todo tipo de violaciones a los derechos de los menores, al interior de las Instituciones Educativas, y para el caso concreto de la Institución Educativa Poblazón Popayán NIT. 817005319-0 (Wawa Khary Pacha Mama) qué tipo de medidas se emitieron.”

Frente a solicitudes probatorias como las realizadas por los demandantes, el inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso, aplicable a la presente controversia en virtud del artículo 306 del C.P.C.A., dispone lo siguiente:

“Artículo 173. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

*En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite**, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.*

(...)” (énfasis añadido).

Sobre la finalidad de la norma que se acaba de transcribir, en especial sobre su inciso segundo, la doctrina especializada ha dicho lo siguiente:

“(...)

*Debe ser analizado el aparte final del inciso segundo del art. 173 del CGP que dispone: “El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.”, **útil norma que impide lo que en el pasado constituyó una mala práctica por parte de los abogados litigantes, quienes recargaban la labor del juez para convertirlo en una especie de mensajero de sus intereses, al solicitar que el mismo oficiara a quien fuera necesario para que remitiera originales o copias, según el caso, de documentos en poder de estos, cuando lo elemental y obvio es que esa labor la despliegue directamente el interesado de modo que únicamente cuando no le es posible obtenerlo y demuestre sumariamente ante el juez esa actividad, este puede entrar a decretar la prueba.***

Esta norma está en estrecha relación con el art. 78 del CGP que respecto de los deberes de los abogados destaca en el numeral 10: “Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir.”

(...)”³² (énfasis añadido).

La opinión doctrina también es compartida por los jueces del país, de ello son ejemplo providencias como la del 4 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó³³:

*“De conformidad con las normas anteriormente transcritas en toda demanda se deberá aportar las pruebas documentales que se encuentren en poder del demandante, **al apoderado le está prohibido solicitar al juez las pruebas o documentos que directamente o por intermedio de derecho de petición hubiese podido conseguir igualmente conforme al inciso segundo del artículo 173 del Código General del Proceso, el juez se debe abstener de ordenar la práctica de pruebas, que directamente o por medio del derecho de petición hubiese podido conseguir la parte que la solicita.***

*En el presente caso la demanda se inadmitió mediante auto interlocutorio número 1417 del 1º de octubre de 2015, **por falta de prueba documental y no se allegó constancia de haberse solicitado a la entidad demandada** (...)” (énfasis añadido).*

De igual forma, en providencias como la del 16 de junio de 2022 del Tribunal Administrativo de Boyacá³⁴ se ha reconocido la carga procesal que tienen las partes frente a la consecución de las pruebas documentales mediante el derecho de petición y la correlativa prohibición de los juzgadores de decretar dichas pruebas susceptibles de conseguirse

mediante el ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Carta Política:

*“En efecto, el aparte final del inciso segundo del artículo 173 ibídem, dispone que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, **lo que deberá acreditarse sumariamente.**”*

*Como lo ha puesto de presente la doctrina³⁵ se trata de una norma muy útil puesto que “impide lo que en el pasado constituyó una mala práctica por parte de los abogados litigantes quienes recargaban la labor del juez para convertirlo en una especie de mensajero de sus intereses, al solicitar que el mismo oficiara a quien fuera necesario para que remitiera originales o copias, según el caso, de documentos en poder de estos, cuando lo elemental y obvio es que esa labor la despliegue directamente el interesado de modo que únicamente cuando no le es posible obtenerlo y **demuestre sumariamente ante el juez esa actividad, este puede entrar a decretar la prueba**”³⁶.*

En el presente caso, teniendo en cuenta tales criterios y de cara a las pruebas documentales solicitadas el despacho concluye que le asiste razón al a quo en esa negativa, pues las documentales que pretende obtener el demandado a través de las solicitudes anteriormente referidas, eran de su cargo, pue ha debido la parte demandada solicitarlas en primer lugar a la entidad, o acreditar siquiera sumariamente que adelantó dicha gestión ante INDUMIL.

Por ello, era necesario que se acreditara la actuación de la parte tendiente a obtener dicha información, demostrándolo siquiera sumariamente, es decir, con la radicación de la petición a la entidad, actividad que se echa de menos.

En este orden, aceptar el argumento de recurrente significaría cohonestar su desidia, lo cual resulta contrario a los principios procesales de lealtad y eficiencia procesal.”

Por todo lo anterior, y conforme a la normativa vigente y a su interpretación tanto jurisprudencial como doctrinal, **SE LE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL DESPACHO ABSTENERSE DE DECRETAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES** peticionadas por la parte actora, en cuanto que el demandante desatendió su deber procesal de intentar conseguir las previamente mediante el ejercicio del derecho de petición, todo ello de conformidad con el inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso.

V. PRUEBAS

5.1. INTERROGATORIO DE PARTE

Con fundamento en el artículo 198 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, solicito comedidamente al señor Juez, ordenar la citación de las personas que integran la parte demandante con el fin de que absuelvan una serie de preguntas que por escrito en pliego cerrado o abierto les formularé sobre los hechos relacionados con el proceso.

5.2. TESTIMONIALES

Ruego respetuosamente el Despacho se me permita realizar las preguntas que considere pertinentes, dentro de los parámetros establecidos en la Ley para tal fin, a los testigos solicitados por la parte demandante y por la parte demandada. Lo anterior, con la finalidad de contribuir con el esclarecimiento de los hechos que requieren apoyo en la declaración de terceros.

Adicionalmente a lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho se decreten los siguientes testimonios:

5.2.1. ALVEIRO MACA ELAGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.616.775 en su calidad de Rector de la Institución Educativa Indígena del Resguardo de Poblazón, quien puede ser citado en el correo electrónico iepoblazon@hotmail.com.

El testimonio tendrá por objeto acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que resultó herido el menor Jhon Deivi Aponza Ramírez, así como la imprevisibilidad e irresistibilidad del evento fatídico.

5.3. DOCUMENTALES

5.3.1. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 43574994000009675 Anexo: 0.

5.3.2. Condiciones general de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de entidades estatales (Decreto 1082 de 2015).

VI. ANEXOS

6.1. Los documentos enunciados en el acápite denominado “Documentales”.

6.2. Poder especial.

6.3. Certificado de existencia y representación de la compañía de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.

VII. NOTIFICACIONES

La parte convocante, en el lugar indicado en el escrito de Llamamiento en Garantía. El suscrito en la Avenida 6A Bis N° 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212, de la ciudad de Cali, o en la Secretaría de su Despacho. Dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

Señores

JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
Popayán

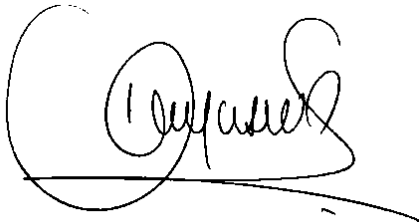
Referencia:	RADICADO:	202100145
	DEMANDANTE.	JHON FERNANDO APONZA ARARAT
	DEMANDADO.	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E
	LLAMADO EN	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
	GARANTÍA.	

MARIA YASMITH HERNANDEZ MONTOYA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número **38.264.817** de **Ibague**, obrando en mi calidad de Representante Legal Judicial de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, debidamente constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, tal como consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, adjunto, manifiesto a Usted que confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**, identificado como aparece al pie de su firma, para que en nombre de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA** se notifique y asuma la defensa de la Compañía dentro del proceso de la referencia.

El doctor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**, queda expresamente facultado para notificarse, recibir, interponer recursos, conciliar, transigir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar y en general para adelantar cualquier diligencia que sea necesaria para dar fiel cumplimiento al presente mandato en defensa de nuestros legítimos derechos e intereses, quien recibe notificaciones en la dirección de correo electrónico notificaciones@gha.com.co

Así mismo confirmamos que **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, recibe notificaciones en la dirección de correo electrónico notificaciones@solidaria.com.co

Cordialmente,



MARIA YASMITH HERNANDEZ MONTOYA
C. C. No. **38.264.817** de **Ibague**
Representante Legal Judicial

Acepto el poder,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C. C. No. 19.395.114 de
T. P. No. 39116

CAL44123 2023/07/28

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 6853481604797811

Generado el 22 de agosto de 2023 a las 16:14:06

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

NIT: 860524654-6

NATURALEZA JURÍDICA: Entidad aseguradora dedicada a los seguros generales, organizada como cooperativa, que tiene el carácter de institución auxiliar del cooperativismo, sin ánimo de lucro. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Escritura Pública No 0064 del 18 de enero de 1985 de la Notaría 32 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la denominación de SEGUROS UCONAL LIMITADA.

Escritura Pública No 3098 del 31 de julio de 1989 de la Notaría 18 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por la de SEGUROS UCONAL SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA.

Escritura Pública No 4201 del 17 de octubre de 1991 de la Notaría 20 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por la de SEGUROS UCONAL.

Escritura Pública No 3296 del 16 de noviembre de 1993 de la Notaría 41 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su razón social por la de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA "SOLIDARIA"

Escritura Pública No 1628 del 19 de julio de 2004 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). El domicilio principal será en Bogotá D.C.

Escritura Pública No 420 del 09 de marzo de 2007 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Es una institución auxiliar del cooperativismo, de carácter Nacional, especializada en la actividad aseguradora, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de ley, con patrimonio variable e ilimitado.

Escritura Pública No 01779 del 24 de julio de 2013 de la Notaría 43 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). El domicilio principal de SOLIDARIA es Bogotá Distrito Capital, República de Colombia, sin perjuicio de constituir Agencias y Sucursales dentro y fuera del país. Es una entidad aseguradora dedicada a los seguros generales, organizada como cooperativa, que tiene el carácter de institución auxiliar del cooperativismo, sin ánimo de lucro, modifica su razón social de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA por la de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.B. 2402 del 30 de junio de 1988

REPRESENTACIÓN LEGAL: El Presidente Ejecutivo de SOLIDARIA, además de Representante Legal, será el Primer Ejecutivo de SOLIDARIA, será el ejecutor de las decisiones de la Junta de Directores y de la Asamblea General, y el responsable directo de la administración de SOLIDARIA. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.** Las funciones y responsabilidades del Presidente Ejecutivo de SOLIDARIA son las siguientes: 1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la administración de SOLIDARIA, así como supervisar y controlar todos los negocios y operaciones de SOLIDARIA. 2. Ejercer la Representación Legal de



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 6853481604797811

Generado el 22 de agosto de 2023 a las 16:14:06

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

SOLIDARIA y, en tal virtud, celebrar los contratos y operaciones propias de su objeto social y que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de SOLIDARIA, y llevar la Representación Judicial y Extrajudicial de SOLIDARIA. 3. Autorizar el desembolso de fondos de acuerdo con los negocios propios de la actividad aseguradora. 4. Ordenar los gastos y desembolsos de recursos, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Junta de Directores. 5. Nombrar la planta de empleados que conforma la estructura administrativa de SOLIDARIA aprobada por la Junta de Directores, asignar las funciones y fijar las remuneraciones, de acuerdo con la escala salarial. 6. Representación judicial y extrajudicial a SOLIDARIA, y conferir poderes especiales y generales. 7. Informar mensualmente a la Junta de Directores sobre el estado de SOLIDARIA. 8. Solicitar la convocatoria extraordinaria de la Junta de Directores, cuando lo juzgue necesario. 9. Solicitar la convocatoria extraordinaria de la Junta de Directores, cuando lo juzgue necesario; 10. Preparar el informe de gestión para presentar a la Asamblea General. 11. Autorizar la apertura de las cuentas bancarias y de ahorros. 12. Todas las demás que se deriven de su cargo o que le sean asignadas por la Junta de Directores. REPRESENTACIÓN LEGAL. En adición al Presidente Ejecutivo, la Representación Legal de SOLIDARIA estará en cabeza de los demás Representantes Legales que designe la Junta de Directores. PARÁGRAFO. Para asuntos Judiciales la Representación Legal de SOLIDARIA la tendrán además de los Representantes Legales, los Representantes Legales Judiciales que designe la Junta de Directores, quienes tendrán funciones de representar a la compañía en actuaciones judiciales y audiencias que se surtan ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, policivas y entidades del sector central descentralizadas del estaso. Especialmente, los representantes legales judiciales tendrán las facultades de constituir apoderados judiciales, representar a la compañía en las audiencias de conciliaciones judiciales, extrajudiciales, para absolver interrogatorios de parte, para recibir notificaciones, tanto ante autoridades jurisdiccionales, administrativas, policiva, así como entidades del sector central y descentralizadas. (Escritura Pública 01779 del 24 de julio de 2013 Notaria 43 de Bogotá D.C.). REGLAMENTO DE ATRIBUCIONES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: ARTICULO SEGUNDO: los demás Representantes Legales, de que trata el artículo primero de éste reglamento, cuentan con las mismas atribuciones de representación legal que las del Presidente Ejecutivo de Aseguradora Solidaria de Colombia, Entidad Cooperativa; señaladas en el artículo 66 del actual cuerpo estatutario. (oficio 2013092496 del 21 de octubre de 2013)

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Francisco Andrés Rojas Aguirre Fecha de inicio del cargo: 01/11/2021	CC - 79152694	Presidente Ejecutivo
José Iván Bonilla Pérez Fecha de inicio del cargo: 17/01/2019	CC - 79520827	Representante Legal
Nancy Leandra Velásquez Rodríguez Fecha de inicio del cargo: 12/03/2020	CC - 52032034	Representante Legal
Claudia Patricia Palacio Arango Fecha de inicio del cargo: 01/09/2022	CC - 42897931	Representante Legal
Maria Yasmyth Hernández Montoya Fecha de inicio del cargo: 28/07/2011	CC - 38264817	Representante Legal Judicial
Juan Pablo Rueda Serrano Fecha de inicio del cargo: 28/07/2011	CC - 79445028	Representante Legal Judicial

RAMOS: Resolución S.B. No 5148 del 31 de diciembre de 1991 Automóviles, Corriente débil, Estabilidad y calidad de la vivienda nueva, Incendio, Manejo, Vidrios, Terremoto, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Sustracción y Cooperativo de vida

Resolución S.B. No 1335 del 29 de abril de 1993 Responsabilidad civil

Resolución S.B. No 868 del 09 de mayo de 1994 Cumplimiento

Resolución S.B. No 1893 del 02 de septiembre de 1994 Transporte



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 6853481604797811

Generado el 22 de agosto de 2023 a las 16:14:06

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

Resolución S.B. No 2565 del 23 de noviembre de 1994 Montaje y rotura de maquinaria, Todo riesgo contratista, Accidentes personales

Resolución S.B. No 2127 del 01 de octubre de 1998 Salud

Resolución S.B. No 636 del 13 de junio de 2002 Exequias

Resolución S.B. No 1067 del 19 de septiembre de 2002 Enfermedades de Alto Costo

Resolución S.B. No 1408 del 09 de diciembre de 2002 cancela el ramo de SOAT

Resolución S.B. No 230 del 11 de marzo de 2003 Vida grupo

Resolución S.F.C. No 0794 del 11 de mayo de 2006 Lucro Cesante

Resolución S.F.C. No 1458 del 30 de agosto de 2011 se revoca la autorización concedida a Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa para operar el ramo de seguros de Enfermedades de alto costo

Resolución S.F.C. No 1194 del 28 de junio de 2013 Seguros de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito SOAT

Resolución S.F.C. No 1577 del 23 de agosto de 2013 autorizado para operar el ramo de Seguro de Desempleo

Resolución S.F.C. No 0842 del 03 de julio de 2019 autoriza para operar el ramo de seguro de Navegación y Casco

Oficio No 2022116107-005 del 29 de junio de 2022 autoriza para operar el ramo de Seguro Decenal



**NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."



**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS**
4351294147

PÓLIZA No: 435 -74 - 994000009675 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGE: 435 RAMO: 74 PAP:
 DIA MES AÑO VIGENCIA DE LA PÓLIZA DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO
 31 01 2020 23 01 2020 23:59 04 12 2020 23:59 316 31 07 2023
 FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS DIAS FECHA DE IMPRESIÓN
 MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO **EXPEDICION** VIGENCIA DEL ANEXO DIA MES AÑO HORAS DIA MES AÑO HORAS DIAS
 23 01 2020 23:59 04 12 2020 23:59 316
 VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR
 NOMBRE: **CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC** IDENTIFICACIÓN: NIT **817.002.466-1**
 DIRECCIÓN: **CALLE 1 #4 - 50** CIUDAD: **POPAYAN, CAUCA** TELÉFONO: **6028242153**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
 ASEGURADO: **MUNICIPIO DE POPAYAN** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.006-4**
 DIRECCIÓN: **CARRERA 6 4 21 EDIFICIO EL CAM** CIUDAD: **POPAYAN, CAUCA** TELÉFONO: **6028333033**
 BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS
 ASEGURADO: **MUNICIPIO DE POPAYAN** NIT : **891580006**
 ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **CAUCA** CIUDAD: **POPAYAN**
 DIRECCION: **CALLE 0 No. 0-0**
 ACTIVIDAD: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**
 TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **ESTATAL** MANZANA: **-1-10**
 DESCRIPCION AMPAROS SUMA ASEGURADA % INVAR SUBLIMITE
 CONTRATO \$ 175,560,600.00
 PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 175,560,600.00
 DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**
 BENEFICIARIOS
 NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del c CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2021800000737 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2020 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON OBJETO: GARANTIZAR LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO PARA ATENDER 509 CUPOS DISTRIBUIDOS EN LOS RESGUARDOS DE POBLAZON Y QUINTANA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2500 DE 2010

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***175,560,600.00	VALOR PRIMA: \$ *****303,984	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****57,757	TOTAL A PAGAR: \$ *****361,741
--	---------------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE EDWIN ARMANDO DIAZ MAYORGA	CLAVE 4076 %PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA %PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000435129414

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá



CARTOLEDO 0

CADB25790D06F87F5B

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174

Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
 Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

DATOS DE LA PÓLIZA

PAGINA: 2

IDENTIFICACION: 817.002.466-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE POPAYAN	891580006-4	CALLE 0 No. 0-0	POPAYAN	175,560,600.00	303,984	361,741
					PRIMA TOTAL SIN IVA		PRIMA TOTAL CON IVA
					303,984		361,741

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA (DECRETO 1082 DE 2015)**

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA COBERTURA.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SE OBLIGA, BAJO LAS CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA, A INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA. ESTA POLIZA TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE LA VICTIMA LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN BENEFICIARIA DE LA INDEMNIZACIÓN.

COBERTURA BÁSICA SEGUN DECRETO 1082 DE 2015

LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUENTA CON UN AMPARO BASICO.

1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS SALVO EN EL EVENTO EN QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
4. AMPARO PATRONAL
5. GASTOS MEDICOS
6. GASTOS DE DEFENSA
7. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
8. LUCRO CESANTE

AMPAROS ADICIONALES

MEDIANTE ACUERDO EXPRESO Y PAGO DE PRIMA ADICIONAL CORRESPONDIENTE, CONSIGNADO EN CADA UNO DE LOS ANEXOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS Y CON SUJECCIÓN A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONVENIDOS Y DETALLADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR:

1. RCE CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA
2. RCE PARQUEADEROS
3. RCE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS
4. RCE CRUZADA
5. RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL

CLÁUSULA SEGUNDA. EXCLUSIONES

LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARA:

1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DEL ASEGURADO.
2. LAS LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS CON DOLO DEL ASEGURADO.
3. LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL ASEGURADO MISMO, SU CÓNYUGE O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL. LA MISMA EXCLUSIÓN OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES O TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA PERSONA JURÍDICA ASEGURADA. TAMPOCO AMPARA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO.
4. EL EXTRAVÍO O PERDIDA DE BIENES DEL ASEGURADO.
5. CUALQUIER EVENTO AMPARADO POR ESTE SEGURO CUANDO OCURRA FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
6. RECLAMACIONES POR DAÑOS A CONSECUENCIA DE ACTOS QUE EL ASEGURADO O PERSONA ENCARGADA POR EL, HAYA OCASIONADO, MEDIANTE EL USO DE UNA EMBARCACIÓN O UNA AERONAVE; O BIEN RECLAMACIONES QUE LE SEAN PRESENTADAS EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DE DICHOS VEHICULOS ACUATICOS O AEREOS, ASI MISMO SE EXCLUYEN LOS DAÑOS A NAVES Y AERONAVES.
7. LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO O PERSONA ENCARGADA POR EL MEDIANTE EL USO DE VEHICULOS, EN SU CALIDAD DE PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR CUANDO DICHOS DAÑOS ESTEN AMPARADOS BAJO POLIZAS DE AUTOMOVILES.
8. LOS DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O POR CUALQUIER OTRA CLASE DE SERVICIOS

PRESTADOS, SI LOS DAÑOS SE PRODUJEREN DESPUES DE LA ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCION DEL TRABAJO O DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PRODUCTOS U OPERACIONES TERMINADAS).

9. MUERTE, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR GUERRAS, INVASION, HUELGA, MOTINES, CONMOCION CIVIL, PERTURBACION DEL ORDEN PUBLICO, COACCION, MANIFESTACIONES PUBLICAS, TUMULTOS, DECOMISO O DESTRUCCION DE BIENES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, DISTURBIOS POLITICOS Y SABOTAJES CON EXPLOSIVOS O ACTIVIDADES GUERRILLERAS, ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT) Y TERRORISMO.
10. LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR OPERACIONES EN LAS QUE SE EMPLEEN PROCESOS DE FUSION NUCLEAR DE MATERIALES RADIOACTIVOS.
11. LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO PROVENIENTES DE LA APLICACION DE LAS NORMAS DEL DERECHO LABORAL, Y AQUELLAS QUE SEAN A CONSECUENCIA DE RECLAMACIONES BASADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
12. RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.
13. DAÑOS CAUSADOS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS, FALLAS GEOLOGICAS, ASENTAMIENTOS Y/O HUNDIMIENTOS, CAMBIOS EN LOS NIVELES DE TEMPERATURA O AGUA, INCONSISTENCIA DEL SUELO O SUBSUELO, LLUVIAS, INUNDACIONES, O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE LA NATURALEZA, INCLUYENDO TERREMOTO, TEMBLOR Y ERUPCION VOLCANICA. ASI COMO LA POLUCION Y CONTAMINACION PRODUCIDAS DE MANERA GRADUAL Y/O PAULATINA.
14. LA RESPONSABILIDAD QUE PUEDA RECLAMARSE ENTRE ASEGURADOS DE LA MISMA POLIZA.
15. LESIONES PRODUCIDAS POR EL CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD PADECIDA POR EL ASEGURADO, ASÍ COMO LOS DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR ENFERMEDADES DE ANIMALES PERTENECIENTES AL ASEGURADO VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL MISMO; IGUALMENTE, QUEDAN, EXCLUIDOS LOS DAÑOS GENETICOS OCASIONADOS A PERSONAS O ANIMALES.
16. DAÑOS ORIGINADOS POR CONTAMINACIÓN U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO ACCIDENTAL, REPENTINO O IMPREVISTO.
17. MULTAS Y CUALQUIER CLASE DE ACCIONES O SANCIONES PENALES Y POLICIVAS.
18. DAÑOS A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES, DE ÓRDENES IMPARTIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.
19. RECLAMACIONES POR DAÑOS A TERCEROS A CONSECUENCIA DE ACTOS DE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR DEL ASEGURADO.
20. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS OCASIONADOS A BIENES AJENOS, QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL ASEGURADO EN ARRENDAMIENTO, COMODATO, DEPOSITO O CUSTODIA.
21. DAÑOS A BIENES INTANGIBLES O PERJUICIOS QUE NO SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES Y/O PERSONALES AMPARADOS POR LA POLIZA.
22. LESIONES PERSONALES, HURTO SIMPLE Y CALIFICADO, PERDIDA O DAÑOS SOBRE LAS PERTENENCIAS DEL ASEGURADO, SU CONYUGUE O SUS PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL. LA MISMA EXCLUSION OPERA CON RESPECTO A LOS SOCIOS DEL ASEGURADO, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA JURIDICA ASEGURADA, SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD DE PERSONAS Y DE LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO.
23. RECLAMACIONES A CAUSA DE DAÑOS A TERCEROS DERIVADAS DEL HURTO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO.
24. DERRUMBE Y OPERACIONES BAJO TIERRA.
25. DAÑOS CAUSADOS CON OCASION DE LABORES DE DEMOLICION DE EDIFICIOS O INSTALACIONES O DESMONTE DE MAQUINARIA, A NO SER QUE TALES ACTIVIDADES CONSTITUYAN EL OBJETO DEL CONTRATO AMPARADO,
26. PERJUICIOS DERIVADOS DE OPERACIONES QUE HAYAN SIDO DEFINITIVAMENTE TERMINADAS O ABANDONADAS POR EL ASEGURADO.
27. PERJUICIOS DERIVADOS DE OPERACION DE DESAGÜE, DISPERSION, O ESCAPE DE HUMO, VAPORES, HOLLIN, ACIDOS, ALCALIS, Y EN GENERAL PRODUCTOS QUIMICOS TOXICOS LIQUIDOS O GASEOSOS, DESPERDICIOS Y DEMAS MATERIAS CONTAMINANTES, ASI COMO RUIDO DENTRO O SOBRE LA TIERRA, ATMOSFERA, RIOS, LAGOS O SIMILARES.
28. DAÑOS A CONSECUENCIA DEL USO, TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS, CUANDO SEA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ASEGURADO.
29. RESPONSABILIDAD DE ESTIBADORES Y OPERACIONES EN DIQUES, MUELLES, DESEMBARCADEROS, RESPONSABILIDAD DE ASTILLEROS
30. DAÑOS CAUSADOS A BIENES O MERCANCIAS DURANTE SU TRANSPORTE.
31. LÍNEAS AEREAS, AVIONES, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AEROPUERTOS, INCLUSIVE LAS EMPRESAS DE CATERING, LA RESPONSABILIDAD DE LA TORRE DE CONTROL, Y EL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA AVIONES.
32. TRABAJOS SUBACUATICOS, MINERIA SUBTERRANEA.
33. DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCION, FABRICACION, MANIPULACION Y USO DE ASBESTO, O SUSTANCIAS QUE TENGAN EN SU COMPOSICION DICHA MATERIA.

- 34. BANCOS DE SANGRE, HEPATITIS, CONTAMINACION BIOLOGICA, FORMADEHIDO.
- 35. RIESGOS MARITIMOS, P&I, RIESGOS PORTUARIOS, TRABAJOS DE DRAGADOS.
- 36. OPERACION DE PLATAFORMAS Y POZOS DE PERFORACION A MAR ABIERTO.
- 37. DAÑOS FINANCIEROS PUROS
- 38. DEPOSITOS Y VERTEDEROS DE BASURAS.
- 39. DAÑOS A ESTRUCTURAS O PROPIEDADES ADYACENTES.

CLAUSULA TERCERA. DEFINICIÓN DE AMPAROS BÁSICOS.

1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO, CAUSADOS A TERCEROS DIRECTAMENTE POR:

LA POSESION, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS EN LOS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD OBJETO DE ESTE SEGURO.

LAS OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO, EN LOS PREDIOS ASEGURADOS Y EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

LAS ACTIVIDADES QUE RAZONABLEMENTE FORMAN PARTE DEL RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES AL DESARROLLO DEL GIRO NORMAL DE LOS NEGOCIOS ESPECIFICADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y QUE COMPRENDEN:

- 1.1 EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMATICAS UTILIZADAS PARA CONECTAR PISOS, DISEÑADOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS, SIEMPRE Y CUANDO FORMEN PARTE DE LOS EDIFICIOS DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.
- 1.2 LA RCE DERIVADA DE INCENDIO Y/O EXPLOSION EN LOS PREDIOS ASEGURADOS
- 1.3 EL USO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
- 1.4 LOS AVISOS Y VALLAS INSTALADOS POR EL ASEGURADO.
- 1.5 EL USO DE INSTALACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO.
- 1.6 LA RCE DERIVADA DE EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.
- 1.7 LOS VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES INHERENTES AL ASEGURADO.
- 1.8 LA PARTICIPACION DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.
- 1.9 LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO Y POR PERROS GUARDIANES DEBIDAMENTE DIRIGIDOS POR PERSONAL CAPACITADO.
- 1.10 LA POSESION Y USO DE LOS DEPOSITOS, TANQUES Y TUBERIA DENTRO DEL PREDIO ASEGURADO.

2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LESIONES A TERCERAS PERSONAS, O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, QUE LE SEAN IMPUTABLES A CONSECUENCIA DE LABORES REALIZADAS EN LOS PREDIOS DEL ASEGURADO POR CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES A SU SERVICIO, PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

LA PRESENTE COBERTURA OPERA EN EXCESO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL QUE TENGA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, ESTE O NO CONTRATADO.

2.1 EXCLUSIONES DEL ANEXO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

- 2.1.1 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO O REPARACION DE LOS PREDIOS, MAQUINARIA O EQUIPO DEL ASEGURADO.
- 2.1.2 TRABAJOS DE AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN EN LOS EDIFICIOS O ESTRUCTURAS DEL LOCAL Y PREDIOS DEL ASEGURADO.
- 2.1.3 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA ENTRE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, ES DECIR, LO PERJUICIOS PATRIMONIALES O EXTRAPATRIMONIALES QUE SE CAUSEN ESTAS PERSONAS ENTRE SI.

2.1.4 TRABAJADORES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA INDEPENDIENTEMENTE CUANDO NO ESTEN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

3. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECCIÓN A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE EVENTOS OCURRIDOS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO O TRABAJO CONTRATADO POR EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES O NEGOCIOS ASEGURADOS.

LA PRESENTE COBERTURA SE EXTIENDE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO DERIVADA DEL USO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO Y LOS TOMADOS EN CONDICION DE ARRIENDO, USUFRUCTO O COMODATO MIENTRAS SEAN UTILIZADOS EN EL GIRO NORMAL DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA.

ESTE AMPARO OPERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS EN EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO – SOAT Y EN EXCESO DE LOS MAXIMOS LIMITES Y COBERTURAS OTORGADOS EN EL SEGURO DE AUTOMOVILES INDEPENDIENTEMENTE SI EL VEHICULO TIENE O NO COBERTURA BAJO ESTOS SEGUROS.

3.1 EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO

- 3.1.1 LA UTILIZACION DE CUALQUIER VEHICULO AUTOMOTOR EN LABORES DE SERVICIO PUBLICO
- 3.1.2 HURTO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO O DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS POR LOS AUTOMOTORES MATERIA DEL PRESENTE SEGURO, INCLUYENDO CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS.
- 3.1.3 HURTO Y HURTO CALIFICADO QUE SE CAUSEN A LOS VEHICULOS MATERIA DE ESTE SEGURO.
- 3.1.4 HURTO Y HURTO CALIFICADO QUE SE CAUSEN A LAS PARTES DE LOS VEHICULOS Y A SUS CONTENIDOS.
- 3.1.5 DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS VEHICULOS MATERIA DEL PRESENTE SEGURO.
- 3.1.6 DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS VEHICULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ASEGURADO.
- 3.1.7 DAÑOS QUE PUEDAN SER CUBIERTOS POR OTRO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, ESPECIALMENTE EL QUE SE INCLUYE EN LAS POLIZAS DE SEGUROS DE AUTOS. ESTA EXCLUSION OPERARA SIEMPRE QUE EL VEHICULO QUE CAUSA EL DAÑO TENGA CONTRATADA ESA COBERTURA, CASO EN EL CUAL, EL PRESENTE ANEXO OPERARA EN EXCESO DE LOS VALORES CUBIERTOS POR DICHA POLIZA.
- 3.1.8 DAÑOS CAUSADOS POR VEHICULOS QUE NO TENGAN PERMISO DE CIRCULACION VIGENTE.
- 3.1.9 DAÑOS CAUSADOS POR VEHICULOS QUE NO TENGAN VIGENTE EL CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA EXIGIDO POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO.
- 3.1.10 DAÑOS CAUSADOS POR TRACTORES, GRUAS, MONTACARGAS Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS VEHICULOS NO DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O BIENES POR VIA PUBLICA.
- 3.1.11 DAÑOS QUE HAYAN SIDO CUBIERTOS O DEBIERAN SER CUBIERTOS POR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
- 3.1.12 DAÑOS CUBIERTOS POR LA POLIZA DE AUTOMOVILES DEL VEHICULO AFECTADO.

4. PATRONAL.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS AL SERVICIO DEL ASEGURADO, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO, SIEMPRE Y CUANDO EL EMPLEADO HAYA CUMPLIDO CON LAS PRESCRIPCIONES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE CUALQUIER OTRO SEGURO INDIVIDUAL O COLECTIVO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS.

4.1 EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO

- 4.1.1 RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES ENDEMICAS O EPIDEMICAS.
- 4.1.2 POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS DELIBERADAMENTE O POR DOLO O CULPA GRAVE DEL TRABAJADOR.

4.2 PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL ASEGURADO CUANDO NO SE TENGA AFILIADOS A TODOS LOS TRABAJADORES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALMENTE ARL.

5. GASTOS MEDICOS.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES QUE EN LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS, SE CAUSEN POR CONCEPTO DE LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE AMBULANCIA Y MEDICAMENTOS DEBIDO A LESIONES CORPORALES A TERCEROS CAUSADAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO ASEGURADO, EN LOS PREDIOS EXPRESAMENTE DETALLADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

6. GASTOS DE DEFENSA.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, INDEMNIZARA LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS QUE APODEREN AL ASEGURADO EN EL PROCESO PENAL, CIVIL O INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL, QUE SE INICIE COMO CONSECUENCIA DIRECTA Y EXCLUSIVA DE UN HECHO AMPARADO EN LA POLIZA.

ESTE AMPARO COMPRENDE:

1. LA PRESENTACIÓN DE CAUCIONES A QUE HAYA LUGAR, EN RAZON DE LOS EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL ASEGURADO POR LAS DEMANDAS PROMOVIDAS EN SU CONTRA, COMO CONSECUENCIA DE PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AMPARADAS BAJO LA PRESENTE POLIZA. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA NO SE OBLIGA, SIN EMBARGO, A OTORGAR DIRECTAMENTE TALES CAUCIONES.
2. LAS COSTAS DEL PROCESO QUE LA VICTIMA O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DE ASEGURADORA SOLIDARIA, ENTIDAD COOPERATIVA O DEL ASEGURADO, EXCEPTO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
 - a. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE UN HECHO DOLOSO O EXCLUIDO DE LA PÓLIZA.
 - b. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE ASEGURADORA SOLIDARIA, ENTIDAD COOPERATIVA.
 - c. SI LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS EXCEDE EL LIMITE ASEGURADO, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SOLO RESPONDERA POR LAS COSTAS EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.
3. LOS DEMAS GASTOS RAZONABLES EN QUE HAYA INCURRIDO EL ASEGURADO EN RELACION CON EL SINIESTRO AMPARADO, SIEMPRE Y CUANDO HAYA MEDIADO AUTORIZACION PREVIA DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA.
7. AMPARO DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O TOMADOR DERIVADA DE DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS POR EL, DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE AL TERCERO AFECTADO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PROVENIENTES DE UN DAÑO FISICO, Y SEAN DEMOSTRADOS Y CUANTIFICADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO.

8. AMPARO DE LUCRO CESANTE.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CUBRE AL ASEGURADO Y/O TOMADOR POR EL LUCRO CESANTE CAUSADO POR EL, EXCLUSIVA Y DIRECTAMENTE AL TERCERO AFECTADO, SIEMPRE Y CUANDO SEA DEMOSTRADO Y CUANTIFICADO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 1077 Y 1133 DEL CODIGO DE COMERCIO.

LA PRESENTE COBERTURA EXCLUYE EL LUCRO CESANTE DEL ASEGURADO.

CLAUSULA CUARTA. DEFINICION DE AMPAROS ADICIONALES.

1. RCE POR CONTAMINACION ACCIDENTAL, SUBITA E IMPREVISTA.
2. RCE POR PARQUEADEROS
3. RCE DERIVADA DE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS.
4. RCE CRUZADA
5. RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL

1. RC POR CONTAMINACION AMBIENTAL, SUBITA E IMPREVISTA

1.1. COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O TOMADOR SOBRE EL DAÑO EMERGENTE CAUSADOS A TERCERAS PERSONAS O PROPIEDADES DE TERCEROS, QUE SE MANIFIESTEN DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DE:

1.1.1 VARIACIONES REPENTINAS, ACCIDENTALES O IMPREVISTAS EN LA COMPOSICIÓN DEL AGUA, DE LA ATMÓSFERA, DEL SUELO O DEL SUBSUELO SIEMPRE QUE SEAN PROVENIENTES DE PREDIOS Y LOCALES AL SERVICIO DEL ASEGURADO, DEBIDAMENTE INCLUIDOS EN EL AMPARO DE ÉSTE SEGURO. RUIDO PRODUCIDO DE MANERA REPENTINA, ACCIDENTAL O IMPREVISTA SIEMPRE QUE SEAN PROVENIENTES DE LOCALES O PREDIOS AL SERVICIO DEL ASEGURADO DEBIDAMENTE INCLUIDAS EN EL SEGURO.

1.2 EXCLUSIONES PARTICULARES AL AMPARO DE RC POR CONTAMINACION AMBIENTAL

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA SEGUNDA, EL PRESENTE ANEXO NO AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O GASTOS MEDICOS POR LESIONES A TERCERAS PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE:

- 1.2.1. LA INOBSERVANCIA DE INSTRUCCIONES O RECOMENDACIONES ESCRITAS PARA LAS INSPECCION, CONTROL O MANTENIMIENTO DADOS POR LOS FABRICANTES DE ARTEFACTOS O INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCION O EL CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE.
- 1.2.2. LA OMISION DE LAS REPARACIONES NECESARIAMENTE INMEDIATAS DE LOS ARTEFACTOS O INSTALACIONES ARRIBA MENCIONADOS.
- 1.2.3. LESIONES GENETICAS A PERSONAS O ANIMALES.
- 1.2.4. DAÑOS OCASIONADOS POR AGUAS NEGRAS, BASURAS O SUSTANCIAS RESIDUALES.
- 1.2.5. LA INOBSERVANCIA DE LEYES, NORMAS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DE LAS AUTORIDADES U ORGANISMOS PUBLICOS QUE SE REFIEREN A LA PROTECCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL
- 1.2.6. DAÑOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON DIOXINAS, CLOROS FENOLES, O DE CUALQUIER PRODUCTO QUE LA CONTENGA.
- 1.2.7. DAÑO ECOLOGICO.
- 1.2.8. DAÑOS POR LA INFLUENCIA PAULATINA DE MATERIAS Y SUSTANCIAS CONTAMINANTES (CONTAMINACION PAULATINA)
- 1.2.9. LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE PETROLEO EN EL MAR.

2. RCE POR PARQUEADEROS.

2.1 COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA POR DAÑOS DE VEHICULOS A TERCEROS PARQUEADOS DENTRO DEL PREDIO DEL ASEGURADO.

ESTA AMPARADA BAJO ESTE SEGURO LA RESPONSABILIDAD RELATIVA A AQUELLOS VEHICULOS QUE ESTEN APARCADOS UNICAMENTE DENTRO DE LOS LINDEROS QUE CONFORMAN LOS PREDIOS DEL PARQUEADERO.

EL SIMPLE HECHO DE QUE EL VEHICULO ESTE DENTRO DEL PARQUEADERO SUFRA DAÑOS A CONSECUENCIA DE UN CHOQUE, NO ES MOTIVO DE INDEMNIZACION BAJO LA PRESENTE POLIZA SINO QUE ADEMAS DE OCURRIR EL HECHO, DEBERA DEDUCIRSE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL ASEGURADO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

SI EL DAÑO SOBREVIENTE DE MOVER EL VEHICULO CON FUERZA MOTRIZ DENTRO DE ESTOS MISMOS PREDIOS, EXISTIRA AMPARO SOLO SI EL CONDUCTOR ES EMPLEADO DEL ASEGURADO Y POSEE EL RESPECTIVO PASE DE CONDUCCION VIGENTE.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1097 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL ASEGURADO NO PODRA RECONOCER O SATISFACER UNA RECLAMACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA TOTAL O PARCIAL O POR VIA DE TRANSACCION, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA COMPAÑIA, SI PROCEDIERE DE OTRA MANERA, LA COMPAÑIA QUEDA LIBRE DE SU OBLIGACION DE INDEMNIZAR.

2.2 GARANTIAS DEL AMPARO DE RCE PARQUEADEROS

- 2.2.1 MANTENER VIGILANCIA, POR LO MENOS CON UN CELADOR, DURANTE EL TIEMPO EN QUE EL ESTABLECIMIENTO ESTÉ PRESTANDO SERVICIO.
- 2.2.2 LA EXISTENCIA DE ESTE SEGURO DEBE TRATARSE EN FORMA CONFIDENCIAL Y POR NINGUN MOTIVO PUEDE SER ARGUMENTO DE PROPAGANDA PARA CON LOS CLIENTES DEL PARQUEADERO. EN LO POSIBLE EL ASEGURADO DEBERA PROCURAR NO ENTERAR DE SU EXISTENCIA AL PERSONAL QUE TRABAJA PARA EL.
- 2.2.3 ENTREGAR AL DUEÑO DEL AUTOMOTOR UN RECIBO DEBIDAMENTE NUMERADO Y FECHADO, EN DONDE CONSTE LA HORA DE ENTRADA Y LA PLACA DEL VEHICULO, Y QUE EL AFECTADO PUEDA PRESENTAR ESTE RECIBO COMO CONSTANCIA DE SU ESTADIA EN EL PARQUEADERO PARA EFECTOS DE LA RECLAMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO DE CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS DESCRITAS, LA COBERTURA OTORGADA POR EL PRESENTE AMPARO SE DARA POR TERMINADA DESDE EL MOMENTO DE LA INFRACCION.

2.3 EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO

- 2.3.1 DAÑOS, PERDIDA O EL EXTRAVIO DE VEHICULOS SITUADOS FUERA DE LOS PREDIOS A QUE SE REFIERE ESTE SEGURO.
- 2.3.2 DAÑOS, PERDIDA O EXTRAVIO DE ACCESORIOS O PARTES DE LOS VEHICULOS, DE SU CONTENIDO O CARGA.
- 2.3.3 DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR HURTO SIMPLE Y CALIFICADO DE LOS VEHICULOS, SUS PARTES, ACCESORIOS, CONTENIDOS O CARGA.
- 2.3.4 DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS POR ACTOS DE INFIDELIDAD DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO

3. RCE DERIVADA DE PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS

- 3.1 COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECCION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CUBRE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO POR LESIONES A TERCERAS PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS QUE LE SEAN IMPUTABLES A CONSECUENCIA DE :
 - 3.1.1 USO, MANEJO O CONSUMO DE PRODUCTOS, CONTENIDO Y/O EMPAQUE, QUE EL ASEGURADO ELABORE O DISTRIBUYA EN DESARROLLO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO TALES PRODUCTOS SE HALLEN FUERA DE SU POSESION FISICA. CUSTODIA O CONTROL Y QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS DEFINITIVAMENTE A TERCERAS PERSONAS.
 - 3.1.2 TRABAJOS Y OPERACIONES COMPLETAMENTE TERMINADOS O EJECUTADOS POR EL ASEGURADO, EXIGIDOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO LAS LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS SE PRODUZCAN DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL SEGURO.
- 3.2 EXCLUSIONES PARTICULARES
 - 3.2.1 DAÑOS O DEFECTOS SOBRE EL MISMO PRODUCTO, TRABAJO U OPERACION REALIZADA.
 - 3.2.2 GASTOS O INDEMNIZACIONES POR RETIRAR DEL MERCADO, O POR INSPECCION , REPARACION, SUSTRACCION O PERDIDA DEL USO DEL PRODUCTO, TRABAJO U OPERACION REALIZADA
 - 3.2.3 DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A LOS USUARIOS DE LOS PRODUCTOS, TRABAJOS, COMO CONSECUENCIA DE ESTOS NO PUEDA DESEMPEÑAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTAN DESTINADOS O NO RESPONDAN A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS POR LOS FABRICANTES. ESTAS DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
 - 3.2.4 DAÑOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS U OPERACIONES QUE NO HAYAN SIDO PROBADOS U OPERACIONES QUE NO HAYAN SIDO PROBADOS O EXPERIMENTADOS ADECUADAMENTE, CONFORME A LAS REGLAS Y TECNICAS RECONOCIDAS.
 - 3.2.5 DAÑOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS U OPERACIONES CUYA DEFICIENCIA SEA CONOCIDA POR EL ASEGURADO.

- 3.2.6 DAÑOS POR PRODUCTOS, OBRAS TRABAJOS U OPERACIONES DESTINADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION, AUTOMOVILES Y/O COMPONENTES DE LA AVIACION.
- 3.2.7 DAÑOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS, CUYA FABRICACION, ENTREGA O EJECUCION CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- 3.2.8 DAÑOS POR ASBESTO EN ESTADO NATURAL O POR SUS FIBRAS DE AMIANTO.
- 3.2.9 DAÑOS A PRODUCTOS AJENOS FABRICADOS MEDIANTE MEZCLA, TRANSFORMACION O SUSTITUCION DE PRODUCTOS DEL ASEGURADO, O FABRICADOS POR MAQUINAS, MONTADOS O MANTENIDOS POR EL ASEGURADO, ASI COMO LOS GASTOS DE REEMBALAJE, TRASVASE Y REEMPAQUETADO DE PRODUCTOS DEBIDO AL DEFECTO DEL ENVASE, EMBALAJE, TAPON O TAPA SUMINISTRADA POR EL ASEGURADO.
- 3.2.10 SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA.
- 3.2.11 DAÑOS OCASIONADOS CON PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

3.3 GARANTIAS PARTICULARES DEL AMPARO

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1061 DEL CODIGO DE COMERCIO EL ASEGURADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA SIGUIENTE GARANTIA, SO PENA DE ANULARSE O DARSE POR TERMINADO EL PRESENTE AMPARO Y QUEDARSE SIN LA COBERTURA CORRESPONDIENTE.

- 3.3.1 EL ASEGURADO SE OBLIGA A DAR Estricto CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES DE USO, ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y /O MANIPULACION SEÑALADAS POR EL FABRICANTE, ASI COMO LAS DEMAS RECOMENDACIONES DE CONOCIMIENTO PUBLICO QUE SE DEBAN TENER SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

- 4.1 COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CUBRIRA LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DEL DAÑO EMERGENTE SUFRIDO Y OCASIONADO POR CONTRATISTAS Y/ SUBCONTRATISTAS ENTRE SI.

ESTA COBERTURA OPERA EN EXCESO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL QUE TENGA EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, ESTE O NO CONTRATADO, Y APLICA SIEMPRE QUE SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON EL OBJETO AMPARADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

4.2 EXCLUSIONES PARTICULARES

- 4.2.1 DAÑOS CAUSADOS A LA OBRA QUE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS ESTE EJECUTANDO.
- 4.2.2 DAÑOS O LESIONES A LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y/O FUERA DEL PREDIO ASEGURADO.

5. RCE POR BIENES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL

- 5.1 COBERTURA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, CON SUJECION A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y LIMITES DE VALOR ASEGURADO CONSIGNADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO Y/O TOMADOR COMO CONSECUENCIA DE LOS SIGUIENTES HECHOS:
 - 5.1.1 DAÑO EMERGENTE CAUSADO A BIENES DE TERCEROS CON OCASION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ASEGURADO DONDE IMPLIQUE TENER BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL DETERMINADOS BIENES, DENTRO O FUERA DEL PREDIO LOCAL DEL ASEGURADO, SIEMPRE QUE LA ACTIVIDAD ESTÉ DEBIDAMENTE AMPARADA EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

5.1 EXCLUSIONES PARTICULARES DEL AMPARO

SE EXCLUYE EL HURTO SIMPLE Y CALIFICADO A LOS BIENES DE TERCEROS QUE ESTEN BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO

CLAUSULA QUINTA. DEFINICION DE TERMINOS.

PARA EFECTOS DE ESTE SEGURO LAS EXPRESIONES O VOCABLOS RELACIONADOS A CONTINUACION TENDRAN EL SIGUIENTE SIGNIFICADO.

1. Asegurado.
Es la persona natural o jurídica, bajo esa denominación figura en la caratula de esta póliza o por anexo. Además de este, todos los funcionarios a su servicio, mientras se encuentran en el desempeño de las labores a su cargo, pero únicamente con respecto a su responsabilidad como tal.
2. Calidad en que actúa el tomador:
Salvo estipulación en contrario, en todos los casos en que el “tomador” sea persona distinta a la especificada en la caratula de esta póliza como asegurado, se entenderá que actúa por cuenta y riesgo del asegurado, sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden cumplir de acuerdo con la ley.
3. Víctima
Tercero que padece el daño a causa de la responsabilidad civil del asegurado. No se considera víctima el asegurado, sus funcionarios o personas que lo representen.
4. Beneficiarios
Es la persona que tiene derecho legalmente a recibir la prestación asegurada, ya sea la víctima, sus causahabientes designados por la ley, o la entidad estatal contratante, según el caso.
5. Deducible.
Es la suma o porcentaje, indicado en la caratula de la póliza, que se deduce del monto de cada indemnización por siniestro y que siempre queda a cargo del asegurado.
6. Vigencia del seguro.
La vigencia de la póliza es el periodo de seguro estipulado en la caratula de la presente póliza.
7. Accidente de trabajo.
Para efectos del amparo patronal, se entiende por accidente de trabajo todo suceso accidental, imprevisto y repentino que sobrevenga durante la realización única y exclusivamente de las funciones asignadas contractualmente al empleado y que le produzca lesión orgánica, perturbación emocional o muerte.
8. Empleado.
Toda persona vinculada al asegurado mediante contrato de trabajo que le preste un servicio personal, remunerado, bajo supervisión directa y en desarrollo de las obras y/o contratos de los cuales se deriva la responsabilidad civil extracontractual.
9. Vehículos propios y no propios.
Para efectos del amparo de vehículos propios y no propios, se entiende por vehículo automotor terrestre, todo tipo de artefacto destinado al transporte de personas y cosas que se mueven sin intervención de una fuerza exterior en vías públicas o privadas destinadas al tránsito.
10. Bienes ajenos.
Son todos aquellos bienes materiales que no son de propiedad del asegurado.
11. Predios
Son los bienes inmuebles donde se ejecuta el contrato celebrado entre la entidad estatal contratante y el contratista.
12. Contratistas y/o subcontratistas
Para efectos del amparo de contratistas y subcontratistas, se entiende por contratistas independientes toda persona natural o jurídica que en virtud de convenios o contratos de carácter estrictamente comercial, presta sus servicios al asegurado en procura del desarrollo de las actividades o negocios objeto de este seguro.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

SIN PERJUICIO DE OTRAS OBLIGACIONES QUE POR LEY LE CORRESPONDA AL ASEGURADO, TENDRA LAS SIGUIENTES:

1. EVITAR EL SINIESTRO
EL ASEGURADO SE OBLIGA A TENER TODA DILIGENCIA Y CUIDADO PARA EVITAR ACCIDENTES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.
2. AVISO DE SINIESTRO: EL ASEGURADO DEBERA DAR AVISO A LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SOBRE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO DENTRO DEL TERMINO LEGAL DE TRES (3) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA CONOCIDO O DEBIO CONOCER LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, DEL IGUAL FORMA EN EL MENCIONADO TERMINO DEBERA NOTIFICAR SOBRE TODA RECLAMACION , DEMANDA O CITACION QUE LE SEA FORMULADA EN RELACION CON LOS HECHOS QUE TENGAN QUE VER EN ALGUNA FORMA CON LA COBERTURA OTORGADA MEDIANTE EL PRESENTE SEGURO.
3. APOORTE DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL ASEGURADO

EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ESTÁN OBLIGADOS A ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ASÍ MISMO, EL ASEGURADO TENDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA COMPAÑÍA, TODOS LOS DETALLES, LIBROS, RECIBOS, FACTURAS, DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, ACTAS Y CUALESQUIER INFORME QUE LA COMPAÑÍA ESTÉ EN DERECHO DE EXIGIRLE EN RELACIÓN CON LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO.

IGUALMENTE ESTA OBLIGADO A FACILITAR LA ATENCION DE CUALQUIER DEMANDA, DEBIENDO ASISTIR A LAS AUDIENCIAS O CITACIONES A QUE HAYA LUGAR, SUMINISTRANDO PRUEBAS, CONSIGUIENDO LA ASISTENCIA DE TESTIGOS Y PRESENTANDO TODA LA COLABORACION NECESARIA EN EL CURSO DE TALES PROCESOS.

3. TRANSACCIONES Y GASTOS.

EL ASEGURADO ESTA OBLIGADO A SOLICITAR AUTORIZACION POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA PARA EFECTUAR TRANSACCIONES O INCURRIR EN GASTOS DISTINTOS DE LOS Estrictamente necesarios para prestar auxilios medicos o quirurgicos inmediatos a terceros afectados por un siniestro. (ANEXO DE GASTOS MÉDICOS A TERCEROS)

4. COEXISTENCIAS DE SEGUROS

SI EL INTERES ASEGURADO BAJO LA PRESENTE POLIZA LO ESTUVIERE TAMBIEN POR OTROS CONTRATOS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SUSCRITOS EN CUALQUIER TIEMPO Y CONOCIDOS POR EL TOMADOR O EL ASEGURADO, ES OBLIGATORIO PARA ELLOS DECLARARLO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA. EL ASEGURADO DEBERA IGUALMENTE INFORMAR POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA ACERCA DE LOS SEGUROS DE IGUAL NATURALEZA, QUE CONTRATE SOBRE EL MISMO INTERES, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ (10) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACION DE DICHO CONTRATO. LA INOBSERVANCIA DE LAS ANTERIORES OBLIGACIONES ACARREARA LAS SANCIONES QUE AL RESPECTO SE ESTABLECEN EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA.

CLAUSULA. INSPECCION Y AUDITORIA.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA ESTA FACULTADA PARA INSPECCIONAR LAS PROPIEDADES Y OPERACIONES DEL ASEGURADO, ASI MISMO, PODRA EXAMINAR LOS LIBROS Y REGISTROS, O SOLICITAR INFORMES DE AUDITORIA O INTERVENTORIA CON EL FIN DE EFECTUAR COMPROBACIONES ACERCA DEL RIESGO.

CLAUSULA OCTAVA. LIMITES MAXIMOS DE RESPONSABILIDAD.

LA RESPONSABILIDAD DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA NO PODRA EXCEDER LOS LIMITES DE RESPONSABILIDAD INDICADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA Y EL PRESENTE CLAUSULADO. CUANDO VARIOS SINIESTROS SE ORIGINEN EN LA MISMA CAUSA SE CONSIDERARAN COMO UN SOLO SINIESTRO. EN LO QUE RESPECTA A LOS GASTOS PROCESALES, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA RESPONDERA AUN EN EXCESO DEL VALOR ASEGURADO, POR LOS COSTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LAS SIGUIENTES SALVEDADES

1. SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O CULPA GRAVE, O ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA DE LA POLIZA.
2. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO CONTRA ORDEN EXPRESA DE LA COMPAÑÍA.
3. SI LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES A CARGO DEL ASEGURADO EXCEDE EL LIMITE ASEGURADO, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SOLO RESPONDERA POR LOS COSTOS DEL PROCESO EN PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACION.
1. CUANDO EL ASEGURADO O EL TERCERO DAMNIFICADO PRESENTE LA RECLAMACION DEMOSTRANDO LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA PERDIDA.
2. CUANDO MEDIANTE PREVIA APROBACION DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, EL ASEGURADO Y EL PERJUDICADO O SUS REPRESENTANTES, ACUERDEN LAS SUMAS DEFINITIVAS QUE EL ASEGURADO DEBE INDEMNIZAR AL AFECTADO O AFECTADOS COMO CONSECUENCIA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY.
3. CUANDO ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA REALICE UN CONVENIO CON EL PERJUDICADO O SUS REPRESENTANTES, MEDIANTE EL CUAL ESTE LIBERE DE TODA RESPONSABILIDAD AL ASEGURADO, EN CUYO CASO PAGARA DIRECTAMENTE AL TERCERO O SUS CAUSAHABIENTES EN NOMBRE DEL ASEGURADO.

PARAGRAFO.

CUANDO EXISTIERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y NO SE LLEGARE A ACUERDO ALGUNO, SE EXIGIRÁ LA SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA.

CLÁUSULA DECIMA. REDUCCION DEL SEGURO POR PAGO DE SINIESTRO.

TODA SUMA QUE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA DEBA PAGAR COMO CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO REDUCIRA EN IGUAL CANTIDAD EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, SIN QUE HAYA LUGAR A DEVOLUCION DE PRIMA.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA. PERDIDA DEL DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACION.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA QUEDARA RELEVADA DE TODA RESPONSABILIDAD Y SE PERDERÁ TODO DERECHO A LA INDEMNIZACION EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

1. SI EN CUALQUIER TIEMPO SE EMPLEAN MEDIOS FRAUDULENTOS O DOCUMENTOS ENGAÑOSOS PARA SUSTENTAR UNA RECLAMACION O PARA DERIVAR BENEFICIO DEL SEGURO QUE ESTA POLIZA AMPARA.
2. POR OMISION MALICIOSA POR PARTE DEL ASEGURADO DE SU OBLIGACION DE DECLARAR A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA CONJUNTAMENTE CON LA NOTICIA DEL SINIESTRO, LOS SEGUROS COEXISTENTES SOBRE EL MISMO INTERES ASEGURADO Y CONTRA EL MISMO RIESGO.
3. POR RENUNCIA DEL ASEGURADO A SUS DERECHOS CONTRA TERCEROS RESPONSABLES DEL SINIESTRO, O PORQUE DE CUALQUIER FORMA SE PONGA A LA ASEGURADORA EN IMPOSIBILIDAD DE SUBROGARSE DE SUS ACCIONES O DERECHOS.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES.

LA SOLICITUD CON BASE EN LA CUAL SE EXPIDE LA PRESENTE POLIZA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE SEGURO. POR LO TANTO, SI EN ELLA HUBIERE CUALQUIER INFORMACION FALSA O RETICENTE O SI SE HUBIERE OMITIDO ALGUN DATO ACERCA DE AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONOCIDAS POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA LE HUBIEREN RETRAIDO DE OTORGAR ESTE SEGURO O LA HUBIERAN LLEVADO A MODIFICAR SUS CONDICIONES, SE PRODUCIRA LA NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUBROGACION.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA SE SUBROGA HASTA LA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO, CON OTRAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO NO ASEGURADAS BAJO LA PRESENTE POLIZA.

EL ASEGURADO A PETICION DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA DEBERA HACER TODO LO QUE ESTE A SU ALCANCE PARA PERMITIR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA SUBROGACION Y SERA RESPONSABLE DE LOS PERJUICIOS QUE LE ACARREE A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA POR FALTA DE DILIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. TERMINACION DEL CONTRATO DE SEGURO.

EL PRESENTE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TERMINA POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

1. POR EXTINCION DEL PERIODO POR EL CUAL SE CONTRATO SI NO SE EFECTUA LA RENOVACION.
2. POR DESAPARICION DEL RIESGO. EN CASO DE EXTINCION POR LA CAUSA AQUI ANOTADA, SI LA DESAPARICION DEL RIESGO CONSISTE EN UNO O MAS SINIESTROS, Y SE AGOTA EL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO, LA COMPAÑIA TIENE DERECHO A LA TOTALIDAD DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA COMPLETA.

CLAUSULA DECIMO QUINTA. CONFIGURACION DEL SINIESTRO Y PRESCRIPCION EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SE ENTENDERA OCURRIDO EL SINIESTRO EN EL MOMENTO EN QUE ACAEZCA EL HECHO IMPUTABLE AL ASEGURADO, FECHA A PARTIR DE LA CUAL CORRERA LA PRESCRIPCION RESPECTO DE LA VICTIMA.

FRENTE AL ASEGURADO CORRERA LA PRESCRIPCION DESDE CUANDO LA VICTIMA LE FORMULE LA CORRESPONDIENTE RECLAMACION, PETICION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. CONDICIONES ESPECIALES Y MODIFICACIONES.

LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL SEGURO QUE SE LLEGAREN A ESTIPULAR EN CASOS PARTICULARES O QUE SE ADHIERAN A LA PRESENTE POLIZA, PRIMARAN SOBRE LAS GENERALES.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. DISPOSICIONES LEGALES.

EL PRESENTE SEGURO ES LEY PARA LAS PARTES. EN LAS MATERIAS Y PUNTOS NO PREVISTOS Y RESUELTOS EN ESTE CONTRATO TENDRAN APLICACION LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA. DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO, SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTA.

TOMADOR

ASEGURADORA